

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ESCUELA MULTILINGÜE DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**DISERTACIÓN DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA MULTILINGÜE DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**ECUADOR DENTRO DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y VENTA DE
DROGAS A LOS CONSUMIDORES DEL PRIMER MUNDO Y SU LUCHA
ANTINARCÓTICOS DURANTE EL PERÍODO 2008-2012**

CAROLINA DEL CISNE COSTA GARCÍA

**2013
QUITO – ECUADOR**

Dedicatoria

*Dedico todo este esfuerzo a mi mejor amigo Ángel Costa Flores,
por impulsarme siempre a ser la mejor versión de mí misma.*

Agradezco:

*A Dios, por ser la luz que ilumina mi rostro cada
mañana al despertar.*

*A mi padre Angelito Costa y a mi hermana
María Gabriela Costa García.*

*A Juan Carlos Valarezo, por su apertura
y apoyo al dirigir esta disertación.*

*A María Eugenia León y Gaetano Servidio,
lectores de esta disertación.*

*A Cecilia Vaca Jones por ser mi ejemplo diario a seguir
como mujer, como profesional y como deportista.*

*A Mónica Vinuesa Flores, Sofía Benavides,
María Gabriela Alarcón y Mauricio Angara.*

*A mi padrino Carlos González Zerquera y su esposa Hany
por guiarme en mi camino espiritual.*

A Carla Molina por haber recorrido este sendero junto a mí.

*A los amigos que se convirtieron en mi familia en Quito:
Ale Vega, Gabriela Núñez, Paola Recalde, Alejandro Martínez,
Esteban Amores, Brian Cho y Galo Quizanga.*

A Cielo

ÍNDICE

1.	TEMA	1
2.	INTRODUCCIÓN	1
	CAPÍTULO I	
	EL NARCOTRÁFICO EN ECUADOR Y LA SEGURIDAD NACIONAL	8
1.1.	Definición de seguridad nacional	8
1.1.1.	La seguridad nacional en Ecuador	11
1.1.2.	Amenazas a la seguridad nacional	13
1.1.3.	El narcotráfico y sus grandes finanzas	15
1.2.	La militarización de la seguridad para combatir al narcotráfico	17
1.2.1.	Visiones acerca de la militarización del combate al narcotráfico	18
1.2.2.	Estrategias para la militarización del combate al narcotráfico	20
1.2.3.	La inversión en la militarización del combate al narcotráfico	22
1.3.	Planes de seguridad y defensa	26
1.3.1.	Plan Nacional de Seguridad Integral	27
1.3.2.	Agenda Política de la Defensa	28
1.3.3.	Plan Ecuador	30
	CAPÍTULO II	
	POSICIÓN GEOGRÁFICO-ESTRATÉGICA DE ECUADOR Y SU ROL POLIFUNCIONAL EN LA RUTA DEL NARCOTRÁFICO	35
2.1.	Colombia y Perú en el banquillo de los acusados	35
2.1.1.	Antecedentes históricos	35
2.1.2.	Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Colombia	37
2.1.3.	Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Perú	40
2.1.4.	La expansión de la industria del narcotráfico en zonas fronterizas de Colombia y Perú	42
2.2.	Ecuador como zona fronteriza del narcotráfico	44
2.2.1.	La incursión del país en una plataforma de ilegalidad	44
2.2.2.	Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Ecuador	45
2.2.3.	Puertos, vías e interconexión de Ecuador con el narcotráfico	50
2.3.	Ecuador dentro del enclave del crimen organizado	51
2.3.1.	La categorización del país como centralizador del narcotráfico	51
2.3.2.	Las aristas del problema	52
2.3.3.	La Amazonía como isla del narcotráfico	53
	CAPÍTULO III	
	LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE DROGAS Y EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	57
3.1.	Marco jurídico y político en materia de drogas	57
3.1.1.	Ley de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas	57
3.1.2.	Tolerancia al consumo de drogas ilícitas y posibles razones para permitir su legalización	61
3.1.3.	El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (CONSEP) y el Observatorio Nacional de Drogas (OND)	63
3.1.4.	Política Nacional de Lucha contra la Droga	66
3.2.	Marco normativo y mecanismos de implementación de la política pública en materia de drogas	68
3.2.1.	El Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas	68

3.2.2.	Reducción de la Oferta y Reducción de la Demanda	72
3.2.3.	Desarrollo Alternativo Preventivo	74
3.3.	Trabajo intersectorial a nivel nacional y Cooperación Internacional en materia de drogas	76
3.3.1.	Estrategias de prevención y cooperación a nivel internacional	78
3.3.2.	Estrategias de prevención y cooperación a nivel regional	82
3.3.3.	Estrategias de prevención y cooperación a nivel nacional	83
3.	ANÁLISIS	91
4.	CONCLUSIONES	96
5.	RECOMENDACIONES	100
	BIBLIOGRAFÍA	103

1. TEMA

ECUADOR DENTRO DEL CIRCUITO DE PRODUCCIÓN, TRÁFICO Y VENTA DE DROGAS A LOS CONSUMIDORES DEL PRIMER MUNDO Y SU LUCHA ANTINARCÓTICOS DURANTE EL PERÍODO 2008-2012

2. INTRODUCCIÓN

La presente disertación se centra en la problemática de las drogas en Ecuador, un fenómeno cuyos tentáculos trascienden cualquier tipo de frontera. Ecuador, junto con los países vecinos y latinoamericanos, está en la necesidad de fortalecer su capacidad nacional de respuesta frente a los problemas y retos que el narcotráfico plantea en todos sus niveles ya que constituye un fenómeno de carácter transnacional con efectos multidimensionales.

A fin de analizar el rol de Ecuador dentro del circuito de tráfico, producción y venta de drogas a los consumidores del primer mundo, así como la aplicación de las políticas nacionales antidrogas, se han planteado tres objetivos orientados primeramente a: determinar los alcances del narcotráfico, sus actividades inherentes y de qué manera debilitan la seguridad nacional. En segundo lugar, se pretende identificar el rol polifuncional del país como origen de varias rutas de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hacia mercados internacionales. Finalmente, se describirá el rol desempeñado por el Estado ecuatoriano y los organismos especializados en materia de narcotráfico en la aplicación de las políticas antidrogas.

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, este trabajo de grado contempla el estudio de tres capítulos. El primero de ellos introduce de una manera general el concepto de seguridad nacional como una prioridad mundial para después darle un tratamiento desde el ámbito local, recalcando la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de proteger a sus ciudadanos de cualquier tipo de invasión y/o amenaza externa o interna.

El país reconoce al crimen organizado como una red delictiva que amenaza su seguridad nacional, por un lado debido al manejo de exponenciales cantidades

de dinero, y por otro, a circunstancias tales como la debilidad institucional del país y la escasa cobertura de servicios sociales en sitios excluidos y sectores más vulnerables de la sociedad, que en un momento propiciaron su penetración. Así pues, el narcotráfico es un fenómeno global cuya capacidad financiera, logística y operativa le ha permitido fortalecer su expansión y poder corruptor, debilitando la estructura y gobernabilidad estatal.

Esta estrecha relación pone de manifiesto la posibilidad que tiene esta industria para corromper a agentes institucionales estatales como son: funcionarios públicos, policías, militares, agentes aduaneros, empresarios, entre otros entes reguladores dedicados al monitoreo y la supervisión. De otra manera, ¿cómo explicaríamos el ingreso y la salida de droga en nuestro país?

Es aquí donde se citan estadísticas fruto del aporte del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), y de otros indicadores de tipo local que revelan que en Ecuador, el lavado de dinero (delito conexo al crimen organizado) asciende a 1100 millones de dólares anuales, cantidad que contrasta por ejemplo con el presupuesto anual del Municipio de Quito que es de 800 millones de dólares.

El comercio ha sido instrumento de actividades irregulares que se rigen a los principios de la ley de la oferta y la demanda, ejerciendo dominio y provocando la interdependencia de los distintos ámbitos y sujetos con los que opera. Dentro de este mercado transnacional de tipo ilegal, se produce una nueva división internacional del trabajo que representa otra ilegal forma de ingreso económico mucho más “rentable”. Así pues, los países de la región, se tornan vulnerables ante estas actividades tanto de producción, de tráfico o de consumo.

Pese a que las estadísticas no son exactas debido al perfil de clandestinidad del narcotráfico, evidentemente éste se ha apoyado en el aparato económico y político. El comercio de drogas se asemeja a una máquina de producción de dinero que posibilita el financiamiento de sus operaciones. Se trata de millones de dólares que perjudican al fisco ya que evaden impuestos. Los carteles del narcotráfico basan sus estrategias en métodos de ocultamiento que

les permiten lograr la impunidad por parte de la autoridad estatal y de las fuerzas de seguridad, aunque estas maniobras no siempre son necesarias dado a que, como cualquier otra empresa multinacional, goza del poder suficiente como para atreverse a desafiar al Estado e incurrir en altos niveles de corrupción.

Por otra parte, el capítulo hace una breve alusión a la Historia, para explicar el porqué de la transición del enfoque militar en materia de seguridad nacional, desde un discurso patriótico estrictamente ligado a la defensa territorial por ambiciones limítrofes externas, hacia otro enfocado a la militarización de la defensa contra la amenaza que representa el narcotráfico, cuyo protagonismo lo lideran las Fuerzas Armadas como fundamento de la nueva política de defensa del país.

En este capítulo también se explica la nueva proyección de la seguridad nacional en Ecuador, cuya mirada está centrada en el bienestar del ser humano como el principal valor plasmado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. En este contexto, se describen los planes de seguridad y defensa que las instituciones competentes han elaborado para gestionar sus estrategias en torno a la lucha anti narcótica y a la recuperación del papel fundamental del Estado en zonas con un alto grado de sensibilidad hacia ciertas amenazas.

El segundo capítulo parte de una descripción sobre el proceso de desvalorización de la esencia ancestral y cultural de la hoja de coca, planta andina, lastimosamente sometida a una transformación tóxica para la obtención de drogas dañinas como la cocaína, y convertida en una forma de sostenimiento económico para que aquellos grupos guerrilleros presentes en la región, financien su adquisición de armas, explosivos, municiones, entre otros insumos y actividades.

Colombia, Ecuador y Perú, tres países andinos cuya herencia histórica común los hace compartir similitudes culturales, económicas, políticas, sociales y poblacionales, son abordados en este capítulo desde una misma óptica, la del narcotráfico, distinguiendo el rol que cada uno de estos países ha desempeñado en la evolución del fenómeno del narcotráfico.

Seguidamente se citan las estadísticas arrojadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cuanto a laboratorios y cultivos de coca con fines ilícitos, de manera especial en Colombia y Perú, considerados los mayores productores en el mundo de esta planta, que al ser manipulada químicamente, da origen a la cocaína, una de las drogas ilegales más cotizadas en el mercado negro. También se hace un recorrido por algunos de los pasos ilegales más conocidos y se describen las razones estratégicas que posibilitan el desarrollo del narcotráfico.

El caso de Ecuador, es abordado con mayor profundidad al ser el foco de atención del presente estudio, y porque sus zonas fronterizas esconden las cicatrices de poblaciones golpeadas por la violencia, el olvido y la pobreza en sus distintas dimensiones, lo cual ha generado las condiciones necesarias para que sus habitantes, voluntariamente o por presión, se involucren en esta actividad ilegal con efectos globalizadores que facilitan su expansión.

El tercer y último capítulo, trata específicamente de la manera mediante la cual la problemática es analizada a nivel nacional, ya no desde el enfoque delictivo ni de las preocupaciones económicas que la licitud o ilicitud del fenómeno generan, sino tomando en cuenta las necesidades de los sujetos y colectivos afectados.

Para ello, se parte del estudio del marco jurídico de la Ley antidrogas que rige en Ecuador, es decir, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de la que se desprenden algunos conceptos y lineamientos necesarios para establecer las prohibiciones y permisiones en materia de drogas. También se cuestiona la criminalización del consumo pero también se aborda lo concerniente a la flexibilidad propuesta por el nuevo Proyecto de Código Integral Penal en cuanto a la tenencia de ciertas dosis en determinadas drogas.

Por otro lado, el capítulo realiza un breve estudio del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas como ente rector de la aplicación de la política pública de drogas, así como de su funcionamiento como institución y de su rol protagónico en materia de prevención y control de drogas.

En esta misma instancia se habla del Observatorio Nacional de Drogas como la entidad facultada para llevar a cabo investigaciones técnico-científicas que provean de información actualizada y confiable sobre la demanda y oferta de drogas, como base para el entendimiento de las necesidades que la sociedad ecuatoriana plantea y para que el Estado ejerza su actividad planificadora y de toma de decisiones a través del CONSEP.

Asimismo se hace referencia a aquellas estrategias generadas dentro del límite nacional, en respuesta a la importancia de la conciencia individual y colectiva, así como a la nueva normativa constitucional y a los principios de cooperación internacional.

Una de estas estrategias es la de contar con una planificación de largo alcance en la que se definan los proyectos y acciones del CONSEP y sus instituciones asociadas. En este sentido, se hace referencia al ejercicio de la Política Nacional de Lucha contra la Droga a través del Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, cuyo objetivo, tras haber realizado el respectivo mapeo de actores involucrados, es el de fijar las acciones que se deben desarrollar para reducir la demanda y la oferta de drogas, focalizando su accionar en los niveles locales del gobierno, pero enmarcando sus lineamientos generales dentro de la estrategia antidrogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD.

Finalmente se aborda el tema del trabajo intersectorial a nivel nacional y de la cooperación internacional en materia de drogas, destacando que pese a que Ecuador continúa siendo un receptor de cooperación, también la ha empleado como estrategia de política exterior para potenciar su rol en los escenarios de discusión regional y para justificar su acción de levantamiento y búsqueda de recursos para la aplicación de la política pública nacional.

Los tres capítulos están concebidos en el marco de la nueva política social, la misma que se alinea con la filosofía del Estado plasmada en la Constitución de la República del Ecuador emitida en el año 2008 y en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.

El problema de las drogas debe ser enfocado de forma multidimensional, incluyendo el cultivo ilícito, la producción, la manufactura, la demanda, la venta, el tráfico y la distribución de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes de tipo anfetamínico, así como también el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.

En el ámbito de las relaciones internacionales, se sitúa la realidad nacional dentro de un contexto de interés global, de acuerdo a la óptica de la teoría de la interdependencia compleja. Es aquí donde los aportes de Robert O. Keohane y Joseph Samuel Nye, respecto a los canales múltiples que conectan a las sociedades, la agenda de las relaciones interestatales y el uso de la fuerza militar, resultan ser apropiados para el estudio del narcotráfico como amenaza transnacional.

El ser humano vive en un mundo que se ha vuelto interdependiente en términos sociales, políticos y económicos. El crimen organizado, y de manera particular, el tráfico de drogas, también está incluido dentro de este contexto global, puesto que ha eliminado y ha cruzado las fronteras entre los Estados-nación.

La interdependencia compleja explica cómo Ecuador ha sufrido los efectos indirectos de la inestabilidad y conflicto de sus países vecinos, aun cuando este mercado ilegal no surgió en nuestro país. De esta manera, Ecuador ha sido sujeto de una interdependencia sensible y de una interdependencia vulnerable al ser el punto medio entre Colombia y Perú, los mismos que como anteriormente ya se mencionó, han sido catalogados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como los mayores productores potenciales en el mundo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así pues, estos países coexisten dentro de un escenario protagonizado por sujetos no estatales.

El narcotráfico constituye un asunto de interdependencia compleja, en el que la agenda política internacional persigue una gran variedad de objetivos no jerarquizados inherentes a la guerra contra las drogas.

Los Estados víctimas de esta división del crimen organizado y sus regímenes internacionales han adoptado un mecanismo de cooperación por medio del cual han establecido los lineamientos necesarios para atacar este fenómeno.

CAPÍTULO I

EL NARCOTRÁFICO EN ECUADOR Y LA SEGURIDAD NACIONAL

“Yo les aseguro, y perdónenme que sea tan franco, que aquí en esta reunión hay mucha gente que está a sueldo de los narcotraficantes y les está informando a los narcos qué está pasando en tiempo real”

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia

1.1. Definición de seguridad nacional

Antes de definir técnicamente a la “seguridad nacional” y sus antecedentes, es necesario conocer el origen etimológico de la palabra “seguridad” para una mejor comprensión de la misma y así, introducirnos en su esencia. “Seguridad” se deriva del latín “securitas, -tatis”, el mismo que puede descomponerse en su raíz “se” que significa separar, “curus” cuidado y el sufijo “tas” que se refiere a cualidad, siendo definido como la cualidad de estar sin cuidado o sin temor a preocuparse. (MARTÍNEZ, 2001).

Los inicios de la seguridad se remontan a la aparición de los primeros grupos humanos, cuando éstos empiezan a preocuparse por la necesidad de protegerse de los riesgos y peligros provenientes de su relación con el ambiente y la sociedad. (MARTÍNEZ, 2001).

A partir de la creación del Estado-Nación como la organización política-social más avanzada establecida por la especie humana, se consolida con fuerza la noción de seguridad. Fue ahí cuando se empezó a hablar de seguridad nacional como una filosofía circunscrita a los procesos políticos, que garantiza la existencia de los individuos, su patrimonio, sus instituciones, sus valores, su cultura y su integridad como nación. (MARTÍNEZ, 2001).

Cabe subrayar que debido a su naturaleza dinámica, la seguridad nacional es un concepto que ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de la Historia, razón por la cual, impone dificultades en su definición concreta. Es por esto que cada Estado la maneja en función de las realidades observadas en su desarrollo político, económico, social y militar desde una perspectiva flexible y versátil, manteniéndose como una prioridad a nivel mundial. (MARTÍNEZ, 2001).

Las agendas de seguridad de los países se fundamentan en ideales de equilibrio y de paz. Éstos, fortalecen su sentimiento de protección frente a aquellas amenazas externas e incluso internas, que pretendan desestabilizar el orden. En este sentido, el concepto de seguridad nacional está arraigado a la confianza de los ciudadanos en el bienestar de sus Estados y en el prestigio de éstos ante otros países. (MARTÍNEZ, 2001).

Al ser la fuente más importante de autoridad y ordenamiento colectivo, el Estado constituye el principal referente de seguridad ya que es la institución que concentra el poder nacional y se ha configurado como el actor más importante dentro del ámbito internacional. (GÓMEZ, 2002).

Harold Brown define a la seguridad nacional como la capacidad de un Estado de preservar la integridad física de la nación y de su territorio, de mantener las relaciones económicas con el resto del mundo en términos convenientes; de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno de los ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras. (BROWN, 1992).

En la teoría de las relaciones internacionales, Thomas Hobbes pone énfasis en la importancia del concepto de seguridad nacional, recalcando que como parte de la razón de ser de un Estado, éste está en la obligación de defender a sus habitantes de la invasión extranjera y de las posibles amenazas, lo cual se traduce en una forma de promover la credibilidad de los ciudadanos en sus Gobiernos. (MANGOLD, 1990).

Como doctrina, este recurso fue desarrollado e impulsado por Estados Unidos en el marco de su Política de Contención a la Unión Soviética. A partir de la segunda mitad del siglo XX, acontecimientos como éste, dieron paso a numerosas definiciones sobre lo que es la seguridad nacional y su consecución, las mismas que han girado en torno a un paradigma realista, motivo por el cual su concepción adquirió un enfoque estrictamente militar. Hans Morgenthau, uno de los principales locutores de la escuela del realismo político defiende la tesis de que una nación está más segura cuando el Gobierno de ésta cuenta con la suficiente

capacidad en términos militares para evitar el ataque de otros Estados. (MORGUENTHAU, 1986).

Sin embargo, se considera que la vigencia de esta teoría está próxima a su caducidad por incurrir en violaciones de Derechos Humanos y porque su interpretación original no responde a la realidad actual. La noción de seguridad nacional no debe estar focalizada únicamente a estudios de guerra ya que las amenazas han dejado de poseer un carácter puramente militar, ampliándose así el concepto de seguridad nacional de manera multisectorial y multinivel. (IEEE, 2011).

De esta manera, a las invasiones físicas se han sumado antagonismos externos e internos que afectan los intereses y valores de carácter político, económico, social, ambiental y humano, poniendo en peligro el bienestar y la calidad de vida de los individuos. (IEEE, 2011).

Ante esto, es necesario poner de relieve que la fuerza militar no es el principal ni el único instrumento que permite alcanzar el ideal de una nación segura. En el ámbito internacional, se ha mencionado que el Estado desempeña un papel protagónico; así, las relaciones entre Estados son percibidas como las de mayor relevancia en las relaciones internacionales, lo que nos conduce a una seguridad cooperativa o seguridad interdependiente, alineada con los principales preceptos de la teoría de la interdependencia compleja, la misma que se contrapone con los ideales realistas. (IEEE, 2011).

Esta seguridad cooperativa o interdependiente acentúa la importancia de fomentar las relaciones ganar-ganar, basándose principalmente en estrategias de cooperación y no de competencia, adecuándose a los procesos de integración actuales, de modo que exista una armonización en la ejecución de acciones a través de la inclusión de locutores estatales y no estatales, organizaciones internacionales, entre otros, puesto que ningún Estado está en la capacidad de afrontar los problemas actuales de forma aislada. (IEEE, 2011).

Así, a medida que la humanidad incrementa sus necesidades, existe una gran preocupación por preservar la existencia de los recursos, mejorar los marcos jurídicos que protejan los intereses de cada nación y mantener políticas claras que beneficien a sus habitantes y a la sociedad en general. Por ello la firma de tratados y convenios se convierte en una herramienta fundamental para el mantenimiento de políticas internacionales que figuren dentro de un marco global.

1.1.1. La seguridad nacional en Ecuador

El fin del problema limítrofe con Perú a finales de los 90 planteó un nuevo paradigma para la seguridad nacional en el país, cuyo libro blanco de defensa se basaba en una estrategia militarista y represiva dentro del marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, con especial énfasis hacia grupos políticos de carácter insurgente u opositor, y con un alcance en materia de defensa territorial. (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008).

Los esfuerzos desplegados por el país en esta materia se re-direccionaron hacia la entrada en vigencia del Plan Colombia, que arrojó luz sobre los problemas que a partir de ese entonces vulnerarían la frontera norte ecuatoriana, considerada generadora de inseguridad debido a la criminalidad organizada, como la incursión de grupos irregulares, el desarrollo de economías ilegales, la proliferación de mafias, así como la declaratoria por parte de Estados Unidos de que el narcotráfico constituía una amenaza a su Seguridad Nacional.

Fue así como el conflicto armado colombiano permitió que en Ecuador entrara en escena un discurso sobre seguridad nacional netamente militar, el mismo que abarcaba la lucha contra fenómenos delictivos hasta ese entonces poco conocidos en nuestro país, así como la presencia de instituciones extranjeras con propósitos militares. (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008).

Estos fenómenos delictivos se intensificaron luego de que la Presidencia de la República de Colombia, junto con el Ministerio de Defensa de ese país, lanzaran en el año 2003 una Política de Defensa y Seguridad Democrática que permitiera

consolidar el control estatal sobre el territorio colombiano y así, estar en la capacidad de contener, desarticular y disuadir a las organizaciones armadas ilegales, proteger a la población y restablecer la presencia estatal y la autoridad, principalmente en territorios considerados estratégicos para la incursión de grupos subversivos, también conocidos como GIAC, Grupos Irregulares Armados de Colombia. (Presidencia de la República et al., 2009).

Esta alternativa, parcialmente efectiva, atenuó el problema. Si bien se logró la retirada de grupos irregulares en el Sur y Oriente colombianos, así como la eliminación de cultivos ilícitos de coca, éstos retrocedieron principalmente a la frontera sur con Ecuador, afectando así los intereses nacionales de este último.

Sin embargo, fue solo después del ataque de Angostura en marzo de 2008 -cuando fuerzas regulares e irregulares de Colombia se enfrentaron en la provincia amazónica de Sucumbíos- que el Gobierno ecuatoriano dio paso a la proyección de una nueva concepción de seguridad nacional.

Ésta, está estrechamente ligada a los conceptos de seguridad humana y se refleja en la última Constitución de la República, cuyo año de aprobación coincide con el del bombardeo antes mencionado. Asimismo, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo y el denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, como parte del nuevo proyecto político que promueve un régimen de desarrollo basado en el “Buen vivir” o “Sumak Kawsay” (en su versión indígena ancestral) por su interés en la consecución del bienestar del ser humano.

En este sentido, en Ecuador, el empleo del término “seguridad nacional” hace referencia a la corresponsabilidad y a la obligación de atender las necesidades básicas de la población, a través de medidas que permitan lograr un desarrollo sostenible del Estado. Aunque “seguridad nacional” y “desarrollo” son conceptos diferentes, ambos están estrechamente ligados. Su relación se basa en el cumplimiento de los Derechos Humanos y en la formulación de acciones participativas enfocadas en una mayor inversión social para mejorar la calidad de vida y la seguridad, especialmente en los espacios fronterizos donde se evidencia

una combinación entre la economía tradicional y aquella basada en actividades ilegales.

1.1.2. Amenazas a la seguridad nacional

La seguridad nacional enfrenta retos significativos debido al surgimiento de nuevas amenazas sobre las cuales los Estados han ubicado áreas de mayor sensibilidad, a fin de identificar los escenarios de prioridad para la construcción de sus agendas de seguridad y defensa, respectivamente. (Ministerio de Defensa Nacional, 2002).

Por su amplia gama de asuntos locales, nacionales e internacionales, una amenaza global que merece especial atención en Latinoamérica es la delincuencia organizada transnacional, manifestada principalmente en el narcotráfico y sus delitos conexos, donde la corrupción, la violencia y la degradación humana, a través del desarrollo de poderosos y sofisticados sistemas de redes delictivas, han socavado estructuras administrativas y han desviado importantes recursos económicos. (Ministerio de Defensa Nacional, 2002).

En nuestro país, la presencia -aunque no extendida- de este tipo de crimen organizado, calificado como delito contra la paz y la humanidad, también ha afectado a la seguridad y defensa nacional. (RIVERA, 2008). Éste se ha evidenciado en las operaciones de captura y desmantelamiento de bandas y laboratorios dedicados al procesamiento y tráfico de drogas y precursores químicos, así como también en la alteración de la economía por medio del lavado de dinero.

De igual manera, el alcance y la magnitud de la corrupción ejercida por esta actividad, se presenta en otras esferas delictivas subyacentes, que constituyen parte de su esencia como negocio, especialmente para camuflar sus sustanciales réditos. Así, nos referimos también al tráfico de personas, contrabando de combustibles, tráfico de armas, piratería y robo de vehículos como los más recurrentes en el país. (Ministerio de Defensa Nacional, 2011).

Todas estas amenazas entorpecen asimismo el cumplimiento de la Declaración del Milenio, acordada en el año 2000 por los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y compuesta por objetivos de desarrollo, conocidos también como los Objetivos del Milenio (ODM), que consisten en el cumplimiento de ocho metas de desarrollo humano con un plazo establecido para el año 2015, a fin de combatir la inseguridad humana en sus múltiples dimensiones. (United Nations, 2000).

Es por ello que el crimen transnacional ataca desde aquellas zonas donde el país no ha ejercido verdaderamente una soberanía territorial, cuyo punto focal es la frontera, puesto que el difícil acceso geográfico a determinadas zonas sumado a las limitaciones en los niveles de desarrollo, propician la propagación del mismo.

Pese a que el discurso político declara que el país está libre de cultivos de coca, Ecuador, al igual que el resto de países de la región, se ha convertido en una zona de influencia de los carteles del narcotráfico. En este sentido, los principales medios de comunicación, desde hace algún tiempo atrás, han venido informando a la ciudadanía sobre la incursión ilegal de bandas vinculadas principalmente al crimen organizado, provenientes particularmente de México y Colombia. (El Comercio, 2012).

Acontecimientos como la captura en marzo de 2012 de Juan Carlos Calle de la Serna, uno de los líderes de la banda criminal más grande y fuerte de Colombia “Los Rastrojos” (Diario Hoy, 2012) junto con la caída en mayo, de una avioneta mexicana en Manabí, presuntamente perteneciente al cartel de Sinaloa y que portaba un cargamento de alrededor de \$1,3 millones (El Comercio, 2012), demuestran que en el país, la soberanía podría verse atropellada debido a la falta de control territorial y a los altos niveles de inseguridad causados por grupos criminales que buscan el dominio de un mercado delictivo.

1.1.3. El narcotráfico y sus grandes finanzas

El hallazgo de la avioneta mexicana que cayó en Pedernales-Manabí con \$1,3 millones es un ejemplo minúsculo del dinero que se puede generar a través del tráfico de drogas. El narcotráfico es un delito que maneja cantidades de dinero exorbitantes, y que debido a su magnitud y su ilegítima procedencia, sus agentes se encuentran en la necesidad de aplicar alternativas que permitan controlar sus fondos sin poner en riesgo a sus beneficiarios ni a la actividad en sí.

En la actualidad, la compra de bienes raíces, inversiones, la creación de negocios o la constitución de casinos son prácticas comunes que facilitan el encubrimiento de los ingresos monetarios provenientes de actividades ilícitas que dan paso al lavado de dinero. (CAMPOS, 2009).

El lavado de dinero consiste en el encubrimiento del verdadero origen de una propiedad a través de la conversión de ingresos ilícitos para ser utilizados como ingresos adquiridos en una práctica legítima y así, encubrir el origen ilícito de la misma. (CAMPOS, 2009).

Es difícil cuantificar el dinero empleado anualmente en el blanqueo de capitales puesto que no existe un consenso que defina la metodología ni la fórmula para este cálculo en sus diferentes etapas: colocación de fondos generados por el delito, distribución del dinero en múltiples transacciones que dificulten el rastreo de los fondos y finalmente, la integración del mismo en actividades comerciales y/o financieras. (CAMPOS, 2009).

Por su economía dolarizada, el país ha mostrado mayor vulnerabilidad al lavado de dinero. (United States Department of State, 2011). Los informes presentados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) indican que durante el año 2010, en la economía legal de Ecuador circularon \$2028 millones ilegítimos de los cuales, aproximadamente \$1570 millones correspondieron al lavado de activos, \$240 millones a la posesión y tráfico ilícito de drogas, mientras que los \$290,1 millones restantes se relacionan con la intermediación financiera, estafa, captación ilegal y otras formas de corrupción. (El Comercio, 2012).

Otra información económica que figura en las estadísticas del Banco Central del Ecuador, señala que para finales del año 2009, la Balanza de Pagos sufrió un déficit de \$2647 millones y para el año 2010, el déficit de ésta alcanzó los \$1212 millones. (Banco Central del Ecuador, 2011).

Es así como surgen interrogantes sobre la liquidez y el origen del dinero que circula en el país tomando en cuenta que los déficits durante los años citados fueron superiores a los superávits, razón por la cual, y de acuerdo al ex Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, se presume que aquellos recursos financieros no contabilizados son los que contribuyen a mantener la liquidez de la economía y financiar los déficits. (El Comercio, 2011).

Sobre lo anterior, se puede evidenciar que el crimen organizado es la madre de otros delitos y aunque en muchos casos ve a la pobreza como una excelente plataforma de expansión dentro de todas las capas de la sociedad, no necesariamente proviene de estos estratos sociales. Al reconocer que éste opera con sumas exponenciales de dinero, se evidencia que tanto la clase media como la clase alta también están inmiscuidas en el mismo.

Asimismo, las cifras citadas constituyen una de las principales causas por las cuales el 22 de junio de 2012, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Ecuador en su lista negra de países no cooperantes y con alto riesgo financiero debido, según dicha institución, a las deficiencias estratégicas del país contra el lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. (Procuraduría General del Estado, 2012).

Esta decisión fue tomada pese a que Ecuador dio un paso significativo al cerrar definitivamente todos los casinos que operaban en el país hasta marzo del año 2012.

Al igual que el narcotráfico, tanto el lavado de activos como formar parte de la lista negra del GAFI también acarrea problemas, ante todo, frente al ámbito internacional, ya que con una imagen estropeada, el riesgo de invertir en el país

aumentaría y los servicios bancarios prestados por entidades extranjeras podrían suspenderse, afectado así al comercio exterior.

1.2. La militarización de la seguridad para combatir al narcotráfico

Los años 1998 y 2008 fueron claves en el horizonte que tomaría la destinación presupuestaria del Gobierno. En el primer caso, una vez resuelto el conflicto limítrofe con Perú, el tema de la defensa militar en términos económicos pasó a ser un asunto secundario. En la práctica, el Estado entró en un proceso de desinversión en el sector castrense, recorte presupuestario que coincidió con la crisis financiera de finales de los años 90 e inicios del año 2000. (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008). No obstante, en la teoría, el discurso militar de defensa se mantuvo como una respuesta ante el problema fronterizo con Colombia.

En el segundo caso, la inversión en equipamiento militar se incrementó cuando el territorio ecuatoriano demostró un alto grado de vulnerabilidad tras ser objeto de ocupación por parte de agentes externos. Marzo de 2008 fue un mes en el que una vez más la debilidad institucional y operativa de las Fuerzas Armadas y policiales en el país se puso de manifiesto. Sin embargo, también constituyó la oportunidad para hacer una evaluación de esta institución castrense y así, iniciar un proceso que corrigiera esos puntos débiles.

Fue ahí cuando el país, desde el plano de lo social, comenzó a trabajar en la generación de nuevas políticas públicas que incrementaran la inversión en el desarrollo en pos de la elevación de los estándares de vida, a fin de promover la seguridad en sectores prioritarios. Desde el plano militar, las Fuerzas Armadas del país entraron en un proceso de recuperación de su protagonismo en la defensa del territorio nacional, asumiendo entre sus roles principales el combate al crimen organizado.

El narcotráfico ha pasado de ser una amenaza externa a ser una amenaza interna. Basta con revisar los medios de comunicación nacionales, para evidenciar cómo este tipo de crimen organizado se ha convertido en noticia de todos los días.

Años atrás, la actividad del narcotráfico se caracterizaba por la clandestinidad de sus operaciones y por aplicar mecanismos que le permitiesen pasar desapercibida. En cambio en la actualidad, parecería que una de sus estrategias es la de hacerse más visible.

La seguridad nacional en Ecuador ha entrado en un intenso debate, claro síntoma del agravamiento del problema. Declaraciones oficiales descartan que este virus esté atacando al país. (Vistazo, 2012). Sin embargo, en lo que fue del año 2012, se tuvo conocimiento de narco-valijas, narco-avionetas y narco-submarinos que ingresaron y salieron del país en un abrir y cerrar de ojos.

Ecuador asimismo es el país de Sudamérica que destina el mayor porcentaje de su PIB para el gasto militar. De acuerdo al Registro Suramericano de Gasto de Defensa, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), creado en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de la UNASUR, Ecuador destina aproximadamente el 2,74% de su PIB al gasto militar. (Observatorio de Política & Estrategia en América Latina, 2012).

Las millonarias inversiones responden a la magnitud de las necesidades, en este caso, combatir las crecientes amenazas lideradas por el narcotráfico.

1.2.1. Visiones acerca de la militarización del combate al narcotráfico

Encuestas realizadas en el último período por el Programa Opinión Pública Ecuador, revelan que la principal amenaza y preocupación de la mayoría de ciudadanos del país es la inseguridad como resultado del avance de los delitos del crimen organizado y el desempleo. (Opinión Pública Ecuador, 2010).

Ante esta realidad, la máxima autoridad del Gobierno ecuatoriano ya ha convocado a todas las fuerzas del orden estatal a combatir un peligro que dejó de ser inminente para pasar a ser real. (El Comercio, 2012).

José Borjón Nieto, Doctor y Maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que al utilizar los términos

combate, batalla y/o guerra contra el narcotráfico, inmediatamente se invoca un asunto de seguridad nacional, razón por la cual queda legitimada ipso facto la participación de las Fuerzas Armadas en dicho combate. (BORJÓN, 2010).

Se considera que la lucha contra el crimen organizado será mucho más efectiva con la presencia de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual el Presidente de la República, Señor Economista Rafael Correa Delgado, ha ratificado la militarización de este combate. (El Comercio, 2012). Sin embargo, la normativa constitucional aprobada en el año 2008 delimita las competencias que cada institución posee. Así, el artículo 158 establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. (Asamblea Constituyente, 2008).

En el marco constitucional, la decisión gubernamental de involucrar a las Fuerzas Armadas en el ordenamiento interno del país ha sido cuestionada por la ciudadanía puesto que la preparación que tienen los elementos de las Fuerzas Armadas es distinta a la que tienen los efectivos policiales y controlar el orden interno es diferente a precautelar las fronteras y la soberanía del país.

Ecuador no es el único país que ha tomado la decisión de militarizar la lucha contra el narcotráfico. Según el Centro Operativo de Seguridad Regional, el cual forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, también se encuentran países como México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay. (CIDDH, 2012).

Ecuador ha mostrado interés en esta iniciativa del SICA, cuyo objetivo es contar con una plataforma de redes de informática y tecnología para compartir información en materia de seguridad, de manera que se pueda enfrentar el crimen organizado. (Crítica en Línea, 2011).

Por otra parte, Jorge Chabat, experto mexicano en seguridad y drogas ha afirmado que la militarización de este combate surge como una medida de

emergencia ante los crecientes índices de violencia, así como a la expansión de los vínculos de los carteles de la droga. (El Comercio, 2012).

Asimismo, utilizando como base la experiencia mexicana y la influencia estadounidense en países latinoamericanos, se la ha calificado de negativa ya que serviría para justificar la guerra, la violencia estatal y la represión masiva, puesto que los soldados no actuarían en defensa de la nación contra militares de otras naciones sino contra los ciudadanos de su propio país. (COCKCROFT, 2010).

De igual manera, José Borjón Nieto considera que la militarización del combate al narcotráfico es una estrategia poco viable ya que mientras no se controle la demanda de sustancias estupefacientes en países consumidores, ésta continuará creando los ambientes propicios para la producción, tráfico y distribución de los mismos, generando ganancias exponenciales para los narcotraficantes. Este argumento coincide con el de Chabat, quien insiste en fortalecer las políticas de salud para atacar la demanda de los consumidores, principal objetivo de los narcotraficantes.

Los argumentos citados anteriormente tienen sus puntos a favor, pero también vale destacar que en la actualidad, una vez que las relaciones Ecuador-Perú y Ecuador-Colombia se han restablecido después de largas contiendas limítrofes y crisis diplomáticas, ya no es posible pensar en la probabilidad de que se desate una guerra con estas naciones. En este sentido, las funciones de las Fuerzas Armadas necesitarían continuar en vigencia, para lo cual su nuevo espacio de acción sería el de proteger a la ciudadanía del crimen organizado.

1.2.2. Estrategias para la militarización del combate al narcotráfico

Las Fuerzas Armadas han insistido en calificar a la violencia y a la inseguridad como las principales preocupaciones para la seguridad interna del país. Ante ello, el 6 de mayo de 2011, mediante Decreto 749, el Gobierno dio la disposición de que efectivos policiales y militares trabajasen conjuntamente por la seguridad interna. (El Comercio, 2012).

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 35 señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinarán acciones conjuntas una vez declarado el estado de excepción y cuando el Presidente de la República así lo disponga. (Asamblea Nacional, 2009).

No obstante, las labores de esta institución no son lo suficientemente amplias, razón por la cual para que su aplicación sea realizable, se requiere una reforma en el cuerpo jurídico de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. (El Comercio, 2012).

En Ecuador, el combate al narcotráfico se encontraba entre las responsabilidades de la Policía Nacional. Sin embargo, la nueva política de defensa, ha incluido entre las tareas de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. (El Comercio, 2012).

La adopción de esta medida surge como una necesidad de fortalecimiento de la institución castrense, la misma que, según el Gobierno, puede lograrse mediante la asignación de nuevas responsabilidades, para lo cual, los efectivos militares requieren desarrollar habilidades que les permitan tener una capacidad de respuesta eficiente a fin de cumplir con su tarea.

Desde el 30 de septiembre del año 2010, se produjeron cambios para que las tareas operativas de las Fuerzas Armadas se profundizaran. Fue así que éstas entraron en un proceso de dotación con equipos policiales y de instrucción en técnicas de control de seguridad interna a cargo de la Policía Nacional. (El Comercio, 2012).

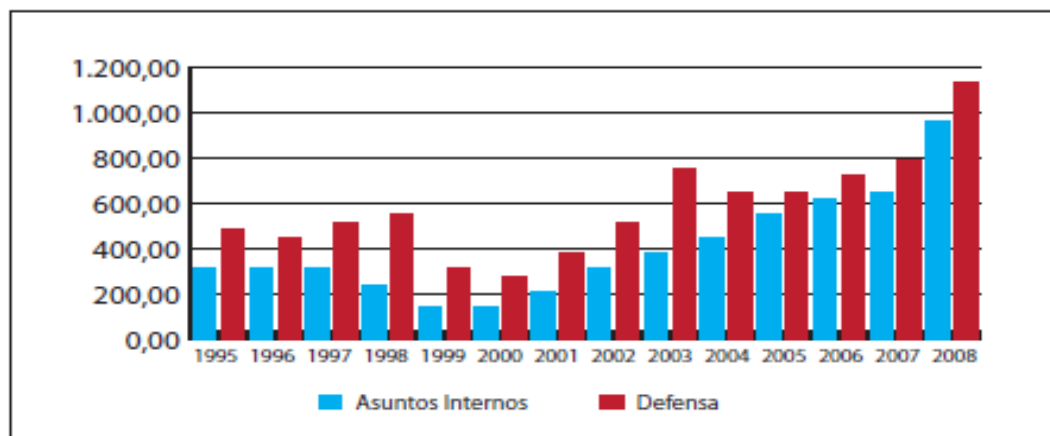
En febrero de 2012, el General Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, puso énfasis en el reporte final de Responsabilidad Social, alertando que las drogas y el crimen en el país se desbordarían si el Gobierno no se apresuraba tomando cartas en el asunto.

1.2.3. La inversión en la militarización del combate al narcotráfico

El Registro Suramericano de Gasto de Defensa del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) advierte que la inversión militar en Ecuador conoció un considerable incremento a partir del año 2008. (Ecuadorenvivo, 2012).

En el gráfico que figura a continuación se puede evidenciar cómo la inversión se disparó en comparación con años anteriores.

GRÁFICO 1
PROPUESTA DE LA SEGURIDAD 1995-2008 EN ECUADOR EN MILLONES DE DÓLARES



Fuente: Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa
Elaborado por: Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y externa

Dado a que las funciones de las Fuerzas Armadas quedaron relegadas durante casi todo el período del año 2000 al 2008, en este último el Gobierno creó el Presupuesto de Fortalecimiento mediante el cual se asignó a los militares \$388 millones adicionales a los \$1023 millones presupuestados para el año fiscal. (Ecuadorenvivo, 2012).

Mientras en el año 2007, en el país se invertía en defensa el 1,8% correspondiente al PIB nominal, para el 2008 esta inversión ascendió a 2,3%, a 2,5% en el año 2009 y a 2,74% en el año 2010. (Ecuadorenvivo, 2012).

TABLA 1
INVERSIÓN EN DEFENSA NACIONAL ECUADOR 2007-2012

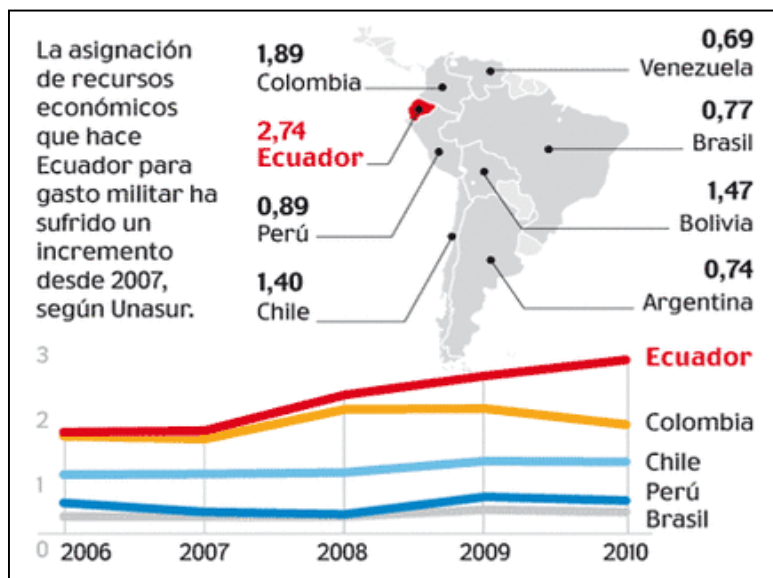
AÑO	BIB NOMINAL DE ECUADOR EN MILLONES DE DÓLARES	GASTO EN DEFENSA NACIONAL EN MILLONES DE DÓLARES	PORCENTAJE DEL PIB (FUENTE UNASUR)	PORCENTAJE DEL PIB (FUENTE BANCO MUNDIAL)
2007	45.504.000.000,00	819.072.000,00	1,80%	2,90%
2008	52.572.000.000,00	1.209.156.000,00	2,30%	3,00%
2009	51.385.000.000,00	1.284.625.000,00	2,50%	3,70%
2010	57.978.000.000,00	1.588.597.200,00	2,74%	3,60%
2011	67.426.000.000,00	1.332.000.000,00	1,98%	3,40%
2012	73.231.000.000,00	1.440.000.000,00	1,97%	N/A

Fuente: Banco Central del Ecuador, UNASUR y El Comercio
Elaborado por: Carolina Costa García

Este registro señala que Ecuador ocupa la primera posición de la región en cuanto a gasto militar, seguido por Colombia que ocupa el 1,89% de su PIB para el efecto y por Brasil con un 0,77% del mismo.

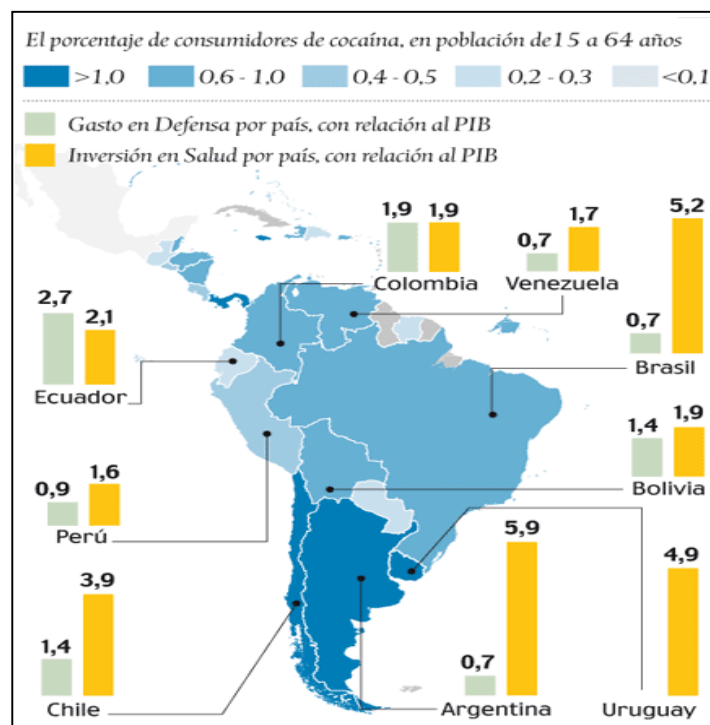
Asimismo se ha contrastado la inversión en materia de defensa con la inversión en salud, específicamente en el caso de prevención, siendo una vez más la seguridad militar una prioridad.

GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE GASTO DE DEFENSA CON RELACIÓN
AL PIB-2010



Fuente: UNASUR
Elaborado por: El Comercio

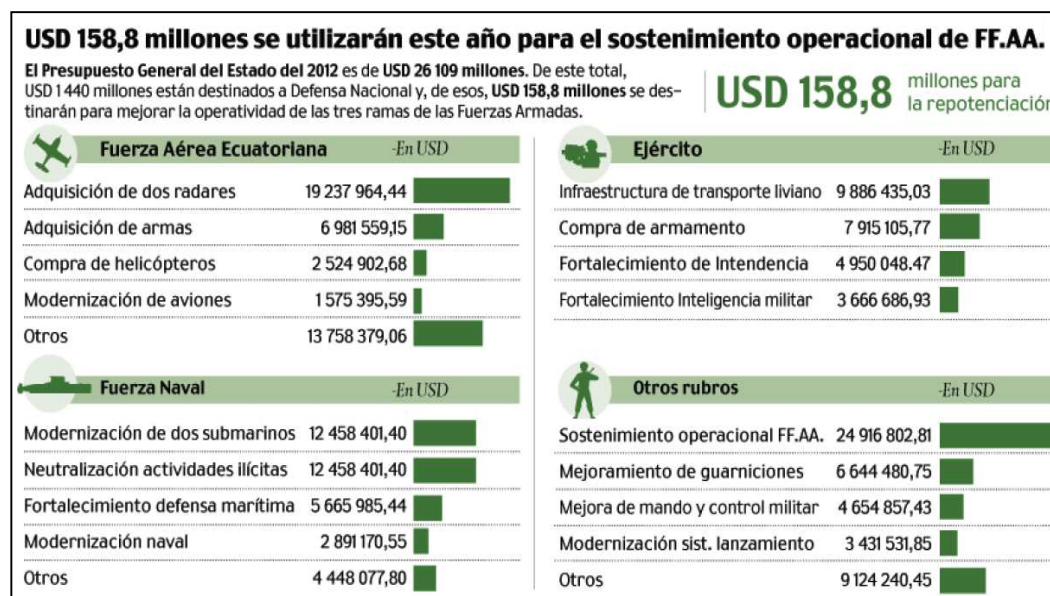
GRÁFICO 3
RELACIÓN CONSUMO E INVERSIÓN ESTATAL



Fuente: UNASUR y CEPAL
Elaborado por: El Comercio

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, la cantidad de dinero presupuestada para defensa en el año 2011 fue de \$1332 millones, la misma que ascendió a \$1440 millones en el 2012. De estos valores, \$158,8 millones serán invertidos en mejoramiento operativo para la adquisición de helicópteros, radares, modernización de submarinos, fortalecimientos de la defensa marítima, compra de armamento para el Ejército, entre otros. A estos rubros se suman \$1923 millones para el orden público, con lo que estas cantidades representarían el 12,8% del Presupuesto General del Estado. (El Comercio, 2012).

GRÁFICO 4
GASTO EN DEFENSA NACIONAL Y SOSTENIMIENTO DE LAS FF.AA



Fuente: Presupuesto General del Estado y El Comercio
Elaborado por: El Comercio

Las cifras que figuran en los gráficos son un reflejo de cómo la inversión militar en Ecuador crece de la mano con las amenazas del narcotráfico. Pese a ser un país pacífico, Ecuador destina importantes recursos económicos en defensa militar.

El país busca avanzar en sus capacidades de defensa a fin de empatar y superar el grado de este problema potencial. Sin embargo, su efectividad debe ser medida no en la cantidad de equipamiento adquirido sino en la habilidad operativa, de instrucción y de despliegue de éstas para dar una respuesta inmediata,

particularmente en tareas de vigilancia y control de fronteras terrestres, las aguas interiores, el mar territorial, el espacio aéreo, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

1.3. Planes de seguridad y defensa

Para superar la histórica ausencia del Estado ecuatoriano, especialmente en las fronteras, así como prevenir y combatir la criminalidad en sus distintas manifestaciones de modo que se garantice la soberanía y la integridad territorial, el Gobierno presentó en el año 2008 una agenda de seguridad integral que prioriza la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el respeto a los derechos del Buen Vivir y pretende mejorar la capacidad defensiva del país. (Ecuador inmediato, 2008).

Esta agenda surge tras una evaluación de la gestión estatal durante una década en la que la seguridad del país recibió poca inversión. Incluye asimismo la intervención de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, del Interior, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como a las secretarías de Inteligencia, Gestión de Riesgos y Plan Ecuador para abarcar la atención a los problemas que surgen desde la frontera, generar directrices y lineamientos orientados a la aplicación de programas sociales y así desarrollar fronteras de paz. (El Universo, 2011).

La lucha contra la inseguridad parte desde un enfoque en el que exista la armonización de las políticas sectoriales con una visión integral y participativa. Esta estrategia está marcada por una visión articulada entre varias instituciones del Estado para coordinar los esfuerzos públicos en su implementación. De esta manera, los entes implicados alinean sus acciones para evitar iniciativas duplicadas y fuera de las metas a futuro planteadas por el país, de modo que los esfuerzos y recursos no se pierdan.

1.3.1. Plan Nacional de Seguridad Integral

En el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Ministerio de Coordinación de Seguridad construyó el Plan Nacional de Seguridad Integral, cuyo objetivo es fortalecer el accionar estatal a favor del bien común. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Su principal aporte es la unificación de todas las esferas de la seguridad, las mismas que se complementan en el Sistema de Seguridad Pública del Estado e integra ocho agendas que definen la gestión de los Ministerios y Secretarías alineados al sector de la seguridad; entre ellas la Agenda Estratégica de Política Exterior, la Agenda de Política de Defensa y la Agenda del Plan Ecuador. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

El plan ha ubicado las áreas de mayor sensibilidad para el país y tomando en cuenta los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto al combate de la violencia y la disminución de sus efectos, centra su mirada en estrategias con un enfoque preventivo, que coadyuven a evitar que un delito ocurra. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

El plan reconoce que la pobreza, el desempleo, el hacinamiento, la falta de oportunidades y la exclusión facilitan el incremento en los niveles de violencia y de delincuencia. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Propone asimismo la reactivación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante el fortalecimiento de su profesionalización ya que de acuerdo a la Constitución de la República, a ambas instituciones les compete la protección de los derechos y libertades ciudadanas. Esto justifica la significativa inversión que el Estado destina especialmente para la lucha contra el narcotráfico. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

1.3.2. Agenda Política de la Defensa

A través del Ministerio de Defensa, el Estado ecuatoriano dirige la Política de Defensa y administra las Fuerzas Armadas, armonizando las acciones entre las funciones del Estado y la institución militar. (Ministerio de Defensa Nacional, 2011).

Para lograr una cultura de seguridad y defensa con principios renovadores, el Gobierno actual se ha centrado en fomentar la relación civil-militar, a partir del fortalecimiento de las capacidades estratégicas y operativas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Con el incremento y permanente mantenimiento de unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tanto para la vigilancia del territorio nacional y del cordón fronterizo con Colombia y Perú, la inversión en defensa nacional está destinada al financiamiento, equipamiento y dotación de personal capacitado en el control del tráfico ilícito en zonas agrestes, carreteras, pasos de frontera, puertos y espacio marítimo, así como en aeropuertos y en el espacio aéreo. (Ministerio del Interior, 2011).

De acuerdo a la Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad, a fin de abarcar un mayor control fronterizo, hasta finales de 2011, se adquirieron aviones interceptores y radares para implementar sistemas de vigilancia aérea y marítima como aeronaves no tripuladas, lanchas rápidas y muelles flotantes, los mismos que incrementaron los controles fronterizos, también se instalaron dispositivos de monitoreo satelital en cada una de las embarcaciones de registro nacional que permiten vigilar la ruta y posición como medidas para reducir la tendencia del tráfico ilegal marítimo. (Ministerio del Interior, 2011).




También se habla del mejoramiento de las condiciones de vida de los recintos militares, de una nueva escala salarial y de compensaciones como se muestra en los siguientes cuadros:

GRÁFICO 5
REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DE LA POLICÍA NACIONAL SEGÚN
SU GRADO DE SERVICIO A PARTIR DEL AÑO 2012

	RMU 2012 (Entre, en dólares)	COMPENSACIÓN (Pago anual)	COMPENSACIÓN (Pago acumulado)
OFICIALES			
General Superior	5.481 - 5.560	12.300 - 13.100	25.400
General Inspector	5.242 - 5.340	8.000 - 8.400	16.400
General de Distrito	4.713 - 4.817	4.400 - 4.700	9.100
Coronel	3.928 - 4.247	5.745 - 6.754	31.480
Teniente Coronel	3.142 - 3.404	3.735 - 4.050	19.440
Mayor	2.618 - 2.829	4.230 - 4.565	21.960
Capitán	2.390 - 2.526	1.770 - 1.875	9.160
Teniente	1.735 - 1.810	2.075 - 2.180	10.725
Subteniente	1.462 - 1.579	880 - 950	4.569
TROPA			
Suboficial Mayor	2.618 - 2.669	6.795 - 6.995	13.790
Suboficial Primero	2.390 - 2.520	4.450 - 4.710	18.320
Suboficial Segundo	1.735 - 1.810	2.499 - 2.613	12.870
Sargento Primero	1.462 - 1.579	1.465 - 1.585	7.615
Sargento Segundo	1.254 - 1.353	984 - 1.070	5.144
Cabo Primero	1.124 - 1.212	637 - 685	3.307
Cabo Segundo	1.020 - 1.102	472 - 520	2.480
Policía	933 - 1.002	392 - 432	2.120

Fuente: UNASUR y CEPAL
Elaborado por: El Comercio

GRÁFICO 6
REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DE LAS FUERZAS ARMADAS SEGÚN
SU GRADO DE SERVICIO A PARTIR DEL AÑO 2012

	 EJÉRCITO	 MARINA	 AVIACIÓN	RMU 2012 (Entre, en dólares)	COMPENSACIÓN (Pago anual)	COMPENSACIÓN (Pago acumulado)
OFICIALES						
	General del Ejército	Almirante	General del Aire	5.481-5.560	12.300-13.100	25.400
	General de División	Vicealmirante	Teniente General	5.242-5.358	8.000-8.800	25.200
	General de Brigada	Contralmirante	Brigadier General	4.713-5.111	4.400-5.600	25.000
	Coronel	Capitán de Navío	Coronel	3.925-4.419	3.320-3.620	24.290
	Teniente Coronel	Capitán de Fragata	Teniente Coronel	3.142-3.541	2.820-3.020	20.090
	Mayor	Capitán de Corbeta	Mayor	2.618-2.944	2.140-2.440	16.030
	Capitán	Teniente de Navío	Capitán	2.390-2.537	1.590-1.890	12.180
	Teniente	Teniente de Fragata	Teniente	1.735-1.810	1.155-1.359	6.279
	Subteniente	Alferez de Fragata	Subteniente	1.462-1.548	880-930	3.619
TROPA						
	Suboficial Mayor	Suboficial Mayor	Suboficial Mayor	2.618-2.669	6.795-6.995	13.790
	Suboficial Primero	Suboficial Primero	Suboficial Primero	2.390-2.481	4.450-4.625	13.610
	Suboficial Segundo	Suboficial Segundo	Suboficial Segundo	1.735-1.804	3.125-3.316	12.870
	Sargento Primero	Sargento Primero	Sargento Primero	1.462-1.643	1.100-1.208	8.078
	Sargento Segundo	Sargento Segundo	Sargento Segundo	1.254-1.408	749-845	5.579
	Cabo Primero	Cabo Primero	Cabo Primero	1.124-1.244	565-649	4.249
	Cabo Segundo	Cabo Segundo	Cabo Segundo	1.020-1.102	472-520	2.480
	Soldado	Marinero	Soldado	933-987	392-422	1.628

Fuente: Proyecto de Resolución y El Universo
Elaborado por: El Universo

Este plan señala que las Fuerzas Armadas deben ejecutar acciones de forma subsidiaria y coordinada con la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad interna y la protección de los derechos humanos. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

1.3.3. Plan Ecuador

Para alcanzar una seguridad nacional que respete los preceptos del Buen Vivir es fundamental mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas en situación de vulnerabilidad a la pobreza, cuyas Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) suelen ser fuente de conflicto y que por ende, demandan una atención prioritaria. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

La seguridad fronteriza con Colombia y Perú, juega un papel transcendental en la prevención del desarrollo de actividades ilegales como soporte a las organizaciones criminales, razón por la cual el desarrollo humano debe constar entre los principales sectores de inversión con el fin de mejorar las capacidades y las condiciones de vida de los habitantes de la frontera. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Para ello, el Estado ecuatoriano, mediante la creación de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador en el año 2007, planteó 7 ejes sobre los cuales gira la gestión de éste en las comunidades pertenecientes al cordón fronterizo norte de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, particularmente, en la franja ubicada a 40 km a partir de la línea limítrofe, beneficiando así a una población de aproximadamente 450.000 personas. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Estos ejes son: reactivación económica y empleo, administración de justicia y control de ilícitos, protección de la soberanía nacional e integridad del Estado, asistencia humanitaria y jurídica, manejo sostenible de los Recursos Naturales, mejoramiento de la infraestructura social básica y fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Tanto la Secretaría Técnica del Plan Ecuador como este último en sí, encuentran su fundamento en la construcción de un país de paz a fin de garantizar la seguridad humana de aquellos pobladores que en décadas anteriores debían desplazarse a largas distancias para satisfacer sus necesidades básicas.

Sobre lo anterior y para seguir los 7 ejes del plan, la Constitución Política del año 2008, en el artículo 249, inserto en el capítulo segundo del Título V sobre la organización territorial del Estado señala que:

Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. (Asamblea Constituyente, 2008: 123).

Es así como, con la finalidad de lograr que aquellos grupos sociales considerados más vulnerables frente a la criminalidad tengan acceso a una vida digna en los ámbitos de salud, educación, vivienda, alimentación, recreación, seguridad social, obras públicas, entre otros aspectos abarcados en el ámbito de la seguridad humana, el Plan se encuentra ejecutando 10 proyectos transversales a sus propios ejes y al Plan Nacional para el Buen Vivir, de los cuales los que se detallan a continuación son los que tienen mayor injerencia en el combate a los delitos del narcotráfico:

El proyecto CUSTODIA AMBIENTAL busca fomentar la productividad agropecuaria del cordón fronterizo de la provincia de Sucumbíos, así como garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes. De este proyecto se han beneficiado alrededor de 500 familias hasta finales del año 2011. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

El proyecto CICLO BÁSICO ACELERADO ha centrado sus objetivos en la inserción de 640 jóvenes en el sistema educativo a fin de que éstos culminen el ciclo básico y se puedan mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Por su parte, el proyecto ESCUELAS DIGNAS, ha beneficiado a cerca de 95.000 niños y niñas enfocando su accionar en la construcción y reconstrucción de infraestructura educativa para los habitantes de Bolívar, Mira y Huaca en Carchi y para Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Putumayo en Sucumbíos. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Con el proyecto ACCESIBILIDAD A ESCUELAS RURALES, aproximadamente 3.930 habitantes se han beneficiado mediante la construcción de puentes y trochas en Esmeraldas (Río Verde y San Lorenzo), Sucumbíos, (Putumayo). (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Mediante el proyecto SEGURIDAD HUMANA Y CULTURA DE PAZ se han implementado condiciones favorables de inclusión y respeto hacia aquellas personas que requieren de protección internacional como en el caso de los refugiados provenientes de Colombia. Para ello se han creado juntas parroquiales, Casas del Buen Vivir y centros infantiles para atención a niños en situación de vulnerabilidad, los mismos que han beneficiado a 230.000 habitantes. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

A través del proyecto COMUNIDADES ALEDAÑAS, se ha beneficiado a 44.500 personas por medio de mejoras en la calidad de vida de los habitantes que residen en zonas cercanas a destacamentos militares ubicados en la franja que cubre los 20 km de la frontera norte. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

Estos proyectos a su vez tienen como común denominador la recuperación del papel fundamental del Estado en la ampliación y mejoramiento de la cobertura de políticas públicas orientadas a la inclusión social y fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en fronteras, puertos y aeropuertos, incrementado la presencia militar, policial y judicial. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2011).

TABLA 2
RESUMEN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL PLAN ECUADOR HASTA FINALES DEL AÑO 2011

Nro.	Proyecto	Ubicación (Provincia)	Inversión en miles de dólares	Beneficiarios
1	Asesoría legal para titulación de predios	Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos	60.000,00 USD	1.627 habitantes
2	Fomento agroproductivo, seguridad alimentaria y custodia ambiental	Sucumbíos	361.175,00 USD	500 familias
3	Implementación del programa Ciclo Básico Acelerado	Esmeraldas y Sucumbíos	279.636,50 USD	640 niñas y niños
4	Escuelas dignas: construcción de infraestructura educativa	Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos	594.050,87 USD	94.767 niñas y niños
5	Contribuir a la accesibilidad en escuelas rurales	Esmeraldas y Sucumbíos	581.834,55 USD	3.924 habitantes
6	Seguridad humana y cultura de paz en la frontera norte	Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos	431.031,94 USD	227580 habitantes
7	Desarrollo local de comunidades aledañas a destacamentos militares	Esmeraldas y Carchi	249.253,34 USD	44.541 habitantes
8	Construcción de sistemas de agua para consumo humano y mejoramiento de la calidad ambiental	Carchi y Sucumbíos	1.003.942,95 USD	6.877 habitantes
9	Estrategia de comunicación	Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos	538.147,24 USD	314.757 habitantes
10	Expansión de cobertura de Radio Pública y RTV Ecuador para 11 repetidoras de televisión y 4 de radio	Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos	1.200.000,00 USD	64.001 habitantes

Fuente: Secretaría Técnica del Plan Ecuador
Elaborado por: Carolina Costa García

A modo de breve conclusión, de todo lo anterior se puede decir que el aporte de la interdependencia compleja es acertado para el estudio del crimen organizado y el narcotráfico, ya que éstos desembocan en problemas de seguridad nacional con derivaciones en áreas de seguridad humana. Es por ello que el Estado ecuatoriano en su agenda política de defensa y seguridad, persigue diversos objetivos en los que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través del resguardo del territorio nacional y control del orden interno, reduzcan y eliminen los costos humanos generados por el narcotráfico para consolidar el progreso económico y social de los sectores y zonas vulnerables por donde éste ha logrado infiltrarse.

A continuación, una vez definido el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional, se hará un recorrido descriptivo, donde las estadísticas de producción, tráfico, venta y consumo permitan entender el perfil transnacional de este crimen, tomando como base las experiencias colombiana y peruana hasta llegar a la realidad ecuatoriana.

CAPÍTULO II

POSICIÓN GEOGRÁFICO-ESTRATÉGICA DE ECUADOR Y SU ROL POLIFUNCIONAL EN LA RUTA DEL NARCOTRÁFICO

“La única Ley que cumplen los narcotraficantes es la del libre mercado”
Virgilio Barco Vargas, Ex Presidente de Colombia

2.1. Colombia y Perú en el banquillo de los acusados

2.1.1. Antecedentes históricos

En Colombia y Perú, la condición de países agrícolas, caracterizada por la diversidad biofísica, cultural y regional de sus territorios, constituye la clave para poseer un alto potencial para la producción de amapola y coca, esta última, planta originaria de Sudamérica, utilizada en los mundos Andino y Amazónico desde hace aproximadamente 3000 años a.C., como elemento ceremonial psicoactivo y como recurso nutricional y medicinal tradicional. (CONALTID, 2007).

En el siglo XIX su producción no se limitó únicamente al masticado o coqueo andino con fines ceremoniales y medicinales (costumbre insólita fuera de Latinoamérica). Ésta, empezó a ser transformada para la elaboración de otros bienes de consumo lícito, pero también ilícito, adquiriendo en tal sentido una importancia económica considerable. (CONALTID, 2007).

Laboratorios farmacéuticos como Merck y Park Davis contribuyeron a la expansión de la popularidad de la hoja de coca mediante la elaboración industrial de cocaína. Productos alcohólicos como el Vino francés Mariani y no alcohólicos como la Coca Cola también vieron su origen en los extractos de las hojas de esta planta. (CONALTID, 2007).

Su valor comercial distorsionó su valor espiritual suplantando costumbres ancestrales por la satisfacción que brinda el culto hacia el dinero fácil. La hoja de coca, símbolo del mundo andino, a partir de la década de los 90's adquirió una estrecha vinculación con el narcotráfico, el mismo que encontró su base en la cocaína, una de las drogas con mayor demanda en el mercado mundial. (CONALTID, 2007).

Según varios estudios realizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, producto del Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, para el año 2008, la producción mundial de coca y cocaína estaba representada en un 81,8% por Colombia y en un 86,6% por Perú. Este programa a su vez cubre territorio boliviano y ecuatoriano para los sembríos de coca; Marruecos para la marihuana; Afganistán, Laos y Myanmar para la amapola, de cuyas vainas se obtiene la morfina, droga potente con la cual se produce la heroína. (UNODC, 2009).

En el caso de Colombia, uno de los problemas más graves que enfrenta, es la lucha armada por un cambio sustancial a nivel político, económico y social, donde grupos insurgentes, inicialmente con un perfil marxista-leninista, han manifestado su inconformidad y oposición a los gobiernos de turno desde principios de la década de 1960. (OTERO, 2007).

Esta situación ha construido un escenario caracterizado por la violencia, debido al protagonismo de actores como: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocidas comúnmente como paramilitares, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han mantenido su accionar a través de alianzas y actividades subversivas altamente dinámicas, entre ellas: secuestros, extorsiones, sicariato. (OTERO, 2007).

La proliferación de cultivos ilícitos (coca, marihuana, amapola) en los territorios donde éstos operan, ha sido posible gracias a acuerdos de protección con los campesinos cultivadores. (GARCÍA, 2010).

A esta estructura se suma el círculo vicioso de la narcoindustria, que de manera simultánea ha hecho de Colombia la acreedora al título de primera productora de coca y a su vez de cocaína a nivel internacional, convirtiéndose así, en la sede de narcotraficantes, organizados en carteles, y cuyos mecanismos y procedimientos han ocasionado altos costos, violencia y desestabilización política.

En el caso peruano, la creciente demanda de la cocaína, especialmente en el mercado norteamericano, convirtió al Valle del Alto Huallaga en la capital mundial cocalera. Para los años 80, la superficie de cultivos de coca destinada al consumo legal alcanzaba apenas las 5.000 hectáreas mientras que aquella articulada al narcotráfico, llegaba a las 195.000 hectáreas, acaparando una producción del 65% para el consumo de Estados Unidos. (BABIESES, et al., 2005).

Este contexto sufrió un progresivo deterioro con la fundación en 1983 del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), cuyas columnas se infiltraron en el Alto Huallaga y en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – VRAE, lo que los convirtió en zonas altamente conflictivas ya que al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, basaron su financiamiento en la producción de la planta de coca, y en la industrialización y comercialización de cocaína en áreas remotas de la cuenca del Río Amazonas. (BABIESES, et al., 2005).

No es una simple coincidencia que los grupos armados ilegales y las denominadas bandas criminales (BACRIM) al servicio del narcotráfico tengan presencia en los mismos sitios de cultivo de coca y las zonas de producción de droga, lo cual dificulta frenar el espiral de ilícitos, violencia y terrorismo.

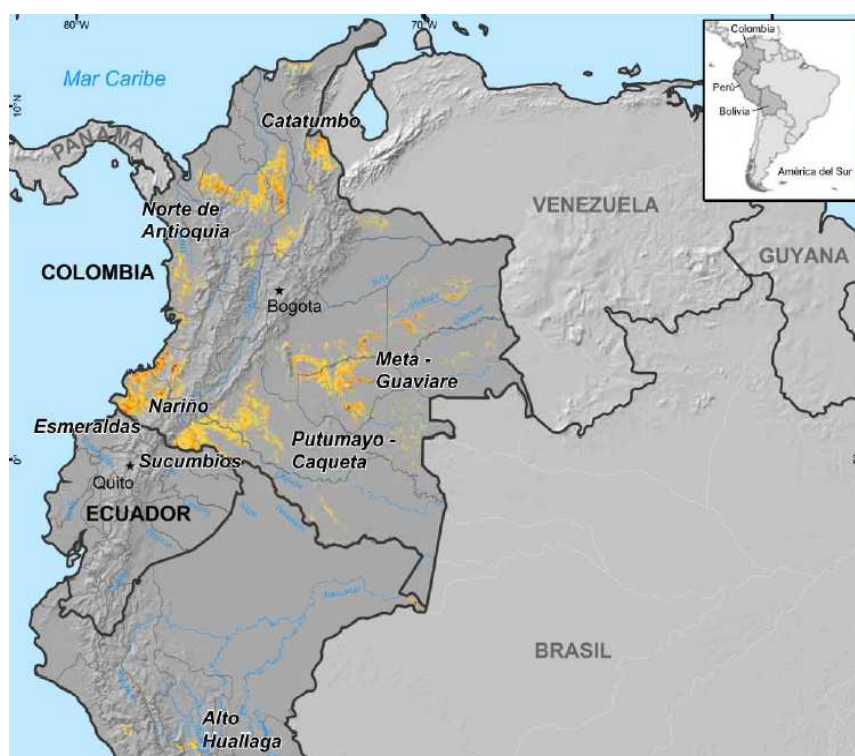
2.1.2. Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Colombia

En respuesta al pedido de apoyo técnico por parte de Gobiernos como los de Colombia y Perú, desde 1999 surge el Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mismo que cubre la totalidad de los territorios en mención. (UNODC, 2009).

Los resultados obtenidos del censo anual de cultivos de coca ponen de manifiesto que tanto Colombia como Perú encabezan la lista de potenciales mayores productores de drogas ilegales en el mundo.

En Colombia, las hectáreas sembradas de coca están distribuidas en 23 de los 32 departamentos del país. La mayor parte de esta superficie cultivada constituye el 84% de los sembríos antes mencionados, ubicados en los departamentos de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca, Caquetá, Antioquia, Meta y Norte de Santander. En éstos, el 23% de la superficie cultivada ha sido localizada en los municipios fronterizos con el sur del país, siendo los departamentos de Nariño (Municipio de Tumaco) y Putumayo los más afectados. (UNODC, 2011).

GRÁFICO 7
DENSIDAD DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA



Fuente: UNODC
Elaborado por: UNODC

En el sitio de producción, el mercado de hoja de coca y sus derivados tiene un valor bruto de \$420.000.000, de los cuales deben descontarse \$200.000.000 correspondientes a costos de producción, lo que equivale al 0,2% del PIB nacional y al 3% del PIB del sector agrícola hasta diciembre de 2011. (UNODC, 2011).

En el año 2009, estudios sobre el rendimiento de la hoja de coca determinaron la participación de aproximadamente 56.900 familias involucradas en su cultivo, cantidad que excluye a la población flotante. (UNODC, 2009). Para finales del año 2011, se estimó la intervención de alrededor de 312.000 personas vinculadas directamente con el cultivo de coca, las mismas que se dividen en aproximadamente 62.400 familias, conformadas por un promedio de 5 miembros. (UNODC, 2011).

En cuanto a la rentabilidad, para un cultivador que únicamente se encarga de comercializarla, los ingresos netos por hectárea de coca bordean los 6.500.000 pesos colombianos anuales y los 541.000 pesos colombianos mensuales, es decir 3.565,55 dólares anuales y 294,00 dólares mensuales. Los valores aquí mencionados no representan mayor capital pero sí una alternativa de subsistencia. (UNODC, 2011).

Anteriormente, era el agricultor quien se encargaba de las fases de siembra y extracción primaria de la hoja de coca, en el proceso de conversión en Pasta Básica de Cocaína (PBC). No obstante, se ha evidenciado en laboratorios clandestinos, que otros intermediarios toman rienda del proceso de transformación, que incluye otras fases diferentes en las que se requiere de un mayor conocimiento y manejo de materiales químicos con los que se les da al producto final un valor agregado hasta llegar a obtener clorhidrato de cocaína.

Su ejercicio se da a través de narcotraficantes o grupos armados ilegales, quienes no encuentran mayores dificultades o limitaciones durante sus gestiones delictivas ya que cuentan con la disponibilidad de los insumos necesarios, entre ellos, sustancias químicas y sustitutos, siendo la gasolina el elemento más utilizado.

En algunos casos, son las guerrillas las encargadas de supervisar los sembríos de coca junto con la producción de pasta básica, mientras que las BACRIM (bandas criminales) ejercen control en los corredores estratégicos para el tráfico de droga y la protección para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos de clorhidrato de cocaína.

2.1.3. Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Perú

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú, los cultivos de esta planta ocupan una superficie de 61.200 hectáreas divididas en una extensión cuya producción de hoja está orientada al narcotráfico y la otra destinada al uso tradicional. (UNODC, 2010).

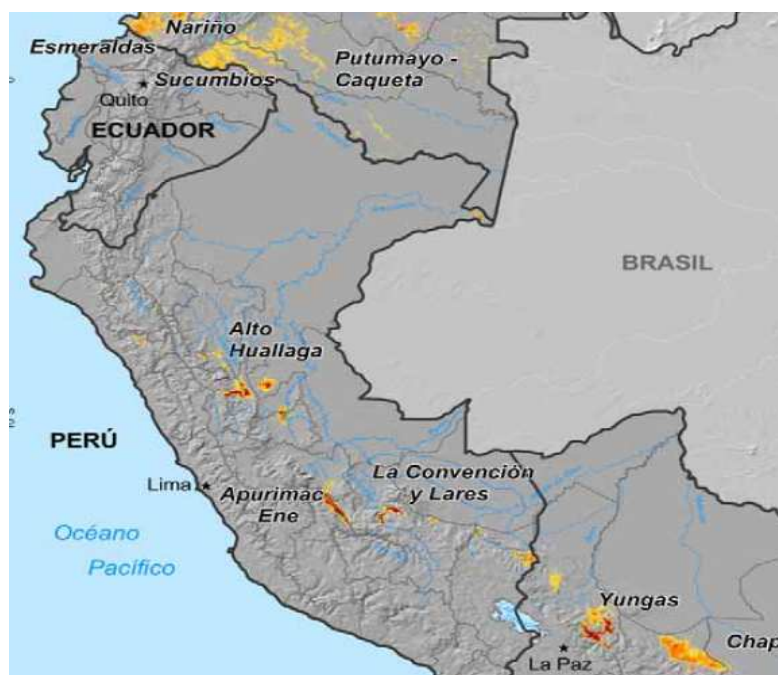
Los cultivos de coca comprenden una cobertura con presencia en 17 zonas en las que se han implicado 79 distritos correspondientes a: Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, Pasco, Huánuco, Ucayali, Ayacucho, Junín, Madre de Dios, Cusco y Puno, 13 de las 24 regiones en las que se divide Perú. (UNODC, 2009).

Las mayores extensiones están agrupadas en primer lugar en la región Cusco con 18.312 hectáreas, en segundo lugar en la región Huánuco con 17.848 hectáreas, en tercer lugar la región Ayacucho con 10.923 hectáreas y finalmente la región Puno con 4.244 hectáreas. Los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac-Ene, La Convención y Lares son los más importantes por su extensión, concentrando el 83,81% de la producción total nacional. (UNODC, 2009).

En estas cuencas la producción que se obtiene en La Convención y Lares está destinada al consumo tradicional, mientras que aquella que se logra en el Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac-Ene, responde a su articulación con el narcotráfico.

Es necesario señalar que a pesar de que el cultivo de coca sea de carácter permanente, el dinamismo del área cultivada impide determinar con precisión la superficie exacta debido a la accidentada topografía, el aparecimiento de plantaciones nuevas, así como al abandono de los campos, o la reactivación de aquellos abandonados, razón por la cual la producción podría ser superior a lo estimado. (UNODC, 2010).

GRÁFICO 8
DENSIDAD DE CULTIVOS DE COCA EN PERÚ



Fuente: UNODC
Elaborado por: UNODC

La salida de la droga de las cuencas cocaleras, se da por medio de los sistemas viales y fluviales existentes, entre ellos: caminos de trocha abiertos entre las malezas, por los cuales transitan los “remanentes de Sendero Luminoso”, denominados también “mochileros o “cargachos” acompañados por el respectivo resguardo armado hasta confluir en puntos intermedios de acopio o “caletas”. (UNODC, 2009).

Anteriormente, la hegemonía del negocio de la droga en el Perú fue ejercida por los carteles colombianos. Sin embargo, en la actualidad el mando está siendo compartido con carteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Guadalajara, cuyos centros de operaciones se ubican en Lima y en otras ciudades costeras para agilizar su despacho al exterior, utilizando principalmente las vías marítimas. (UNODC, 2010).

De estos carteles, el de Sinaloa domina y acopia más del 80% de la droga procesada en los Valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), cuyo mayor volumen está dirigido a mercados externos y en menor escala a mercados internos.

La reactivación de la economía de las familias campesinas está fuertemente articulada al narcotráfico. La hoja de coca forma parte de la cédula de cultivos de los agricultores y aunque no dependan exclusivamente de ésta, se han beneficiado directa e indirectamente de los ingresos generados a partir de su comercialización. (UNODC, 2009).

La población campesina que subsiste de su cultivo, rechaza aquellas medidas gubernamentales que pretendan frenar o limitar su producción, creando un ambiente hostil entre ambas partes, el mismo que se agrava cuando existe presencia de columnas subversivas. (UNODC, 2010).

2.1.4. La expansión de la industria del narcotráfico en zonas fronterizas de Colombia y Perú

Desde Aguas Verdes se ve muy lejos a Lima; desde Huaquillas se ve muy lejos a Quito; desde Ipiales se ve muy lejos a Bogotá. Sin embargo, en el caso de Aguas Verdes, ven muy cerca a Huaquillas, y en el caso de Ipiales ven muy cerca a Tulcán. (CARRIÓN, et al., 2011: 52).

Desde el punto de vista nacional o local, esta afirmación define a las fronteras como espacios excluidos dentro de un mismo territorio. Desde el punto de vista internacional, las zonas fronterizas constituyen puntos de inclusión, intermedios y encuentro con otras culturas. (CARRIÓN, 2011).

En el título de esta sección se hace referencia a “zonas fronterizas” y no a “fronteras” ya que mientras las fronteras evocan la existencia de una región o franja divisoria entre dos o más espacios territoriales, las zonas fronterizas son superficies sobre las cuales dichas franjas de frontera generan algún impacto y especifican el tipo de relación socioeconómica que ambas Naciones tendrán a futuro.

Los Estados se han implantado con dificultad en las fronteras ya que su territorio y sus habitantes se han hecho invisibles antes los ojos de los centros urbanos principales. De esta manera, las fronteras se han convertido en muros de separación para los Estados que luchan contra el crimen, mientras que las zonas fronterizas le brindan continuidad a éste y a otras condiciones de fragilidad y precariedad altamente vinculadas en redes de confianza con una economía política que corrompe, con una economía cultural donde el dinero fácil tiene más valor que la moral y una economía social atacada por el temor, la inseguridad y la ilegalidad. (ESPINOSA, 2011).

Los impactos que las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú han generado en sus propias zonas fronterizas son fruto de desaciertos gubernamentales. En el caso de Ecuador, razones geopolíticas y geoestratégicas, motivadas principalmente por posibles invasiones peruanas, frenaron la inversión en infraestructura y comunicación en las zonas fronterizas, diseñando así nuevas fronteras entre espacios dentro del propio Ecuador, como con sus países vecinos, lo que desembocó en la exclusión económica y el ocultamiento social de las poblaciones que ahí residen. (CARRIÓN, 2011).

Una vez delineadas las nuevas fronteras, las zonas fronterizas de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, establecieron nuevas relaciones internas con las zonas fronterizas de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo.

Una de estas nuevas fronteras tuvo su origen con la producción petrolera, a la cual las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo apenas pudieron ser compensadas de sus beneficios, siendo marginadas de esta potencial empresa. Estas poblaciones tuvieron que buscar redes de confianza y de ayuda mutua que les permitieran “pasar al otro lado” en búsqueda de soluciones a sus demandas sociales acumuladas. (ESPINOSA, 2011).

La creciente emergencia de la producción cocalera por la que atravesaban los departamentos del Sur de Colombia, convirtieron a las provincias del Norte de Ecuador en proveedoras de: abonos, fungicidas, pesticidas y otros insumos

necesarios para el cultivo de coca y la elaboración de pasta base y cocaína. (ESPINOSA, 2011).

Mediante esto, se pudo desarrollar la plantación e industrialización de la hoja de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo, potenciando una nueva vinculación fronteriza delictiva, caracterizada por la dualidad de su economía al estar compuesta por mercados legales e ilegales y protegida a través de la extorsión, el secuestro y el homicidio. (ESPINOSA, 2011). Es así como estos delitos reconfiguran la sociedad para crecer económicamente en el comercio hasta alcanzar niveles políticos preponderantes.

2.2. Ecuador como zona fronteriza del narcotráfico

2.2.1. La incursión del país en una plataforma de ilegalidad

Luego de estudiar los censos de cultivos ilícitos en Colombia y en Perú, se puede apreciar cómo éstos han replanteado sus propios límites geográficos. Ecuador se encuentra ubicado en la línea divisora entre ambas naciones, la misma que constituye el punto de encuentro de lo legal e ilegal.

Con la globalización se hablaba de la eliminación de fronteras. No obstante, también las ha redefinido y potenciado en otros contextos, permitiendo con esto la incursión de Ecuador dentro de una plataforma internacional de integración, con una lógica transfronteriza distinta. (CARRIÓN, 2011).

Así pues, Ecuador no es tan solo la frontera que separa la geografía de Colombia con la de Perú. Ecuador se ha convertido en la zona fronteriza que facilita el encuentro de dos soberanías distintas que han sido catalogadas como los mercados con mayor producción de coca en el mundo.

Ecuador recibe de esta manera una nueva denominación como zona fronteriza del crimen, propicia para el desarrollo de una economía de frontera, debido a las asimetrías con sus países vecinos como medidas proteccionistas o aranceles, pero también a la funcionalidad y la complementariedad que entre ellos se brindan: lo que es legal, lo que existe y lo que tiene un precio inferior en un

lugar; resulta ser ilegal, no existe y tiene un precio superior en otro y viceversa. Es aquí donde surgen las condiciones necesarias para que aumente la distancia con la Ley y para que disminuya aquella con la del delito. La frontera ofrece resguardo a los flujos mercantiles ilegales. (CARRIÓN, 2011).

La producción cocalera en las áreas rurales del sur de Colombia tuvo su impulso gracias a las provincias fronterizas y a su aporte de insumos requeridos para el cultivo, elaboración e industrialización.

Esta economía de frontera también es posible por inequidades y violencia, las mismas que producen altas tasas de migración debido a la atracción que un espacio territorial ejerce sobre un grupo poblacional.

De esta manera, a través de un mercado negro como eje para el crecimiento económico, y a la mano de obra delictiva como fuente de riqueza, espacios ambiguos en términos limítrofes y de soberanía -que históricamente han pasado desapercibidos ante los ojos del Estado, pero que de todas formas han originado conflictos sociales y políticos- han logrado sostenerse gracias a la estructuración de un sistema ilegal. (ESPINOSA, 2011).

2.2.2. Algunas estadísticas de la industria del narcotráfico en Ecuador

Ecuador forma parte del Programa Mundial de Monitoreo de Cultivos Ilícitos desde junio de 2005. Un año después, en el 2006 se efectuó la primera evaluación en toda la frontera norte del país, en la que se incluyó a las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en vista de su proximidad a zonas cocaleras de Colombia. (UNODC, 2008).

En Carchi las condiciones agroclimáticas no resultan favorecer el desarrollo normal de la planta como sucede en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos. (UNODC, 2008).

Durante este mismo período, y como parte de la labor realizada en el monitoreo de cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano, no se han registrado

En efecto, de acuerdo a los resultados arrojados por el monitoreo de cultivos de coca apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cantidad de terreno utilizado en Ecuador no supera las 0.25 hectáreas, las mismas que equivalen a 2.500 metros cuadrados de producción cocalera en el país. Esta ínfima superficie no puede competir con la producción de Colombia, representada por 64.000 hectáreas, ni con las 61.200 hectáreas que se cultivan en Perú. (UNODC, 2010).

The map displays the geographical features of Ecuador, including its provinces and major rivers. The monitoring area is highlighted in red, covering parts of Esmeraldas, Carchi, and Napo provinces. The legend at the bottom left provides a key for the symbols used: a solid line for international limits, a dashed line for provincial limits, a blue line for rivers, and a red area for the monitoring zone. The scale bar at the bottom right indicates distances in kilometers, ranging from 0 to 200 km. The inset maps provide context, showing the Galapagos Islands and Ecuador's position within South America.

46

Se estima que en el mundo, anualmente se incautan alrededor de 720 toneladas de cocaína. En Ecuador, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, emitido a finales de 2011, la superficie mínima destinada para el cultivo de coca no constituye impedimento alguno para que el país ocupe el tercer lugar en el ranking mundial con los mayores decomisos de cocaína, los mismos que constituyen el 9% de droga incautada (64,8 toneladas), superado por Estados Unidos con el 15% y por Colombia con el 35%. La Policía Antidrogas de Ecuador ha incautado en los últimos cinco años cerca de 398,3 toneladas de droga de las cuales el 71% corresponde a la cocaína. (El Comercio, 2012).

GRÁFICO 10
COCA INCAUTADA



Fuente: UNODC y Antinarcoóticos
Elaborado por: El Comercio

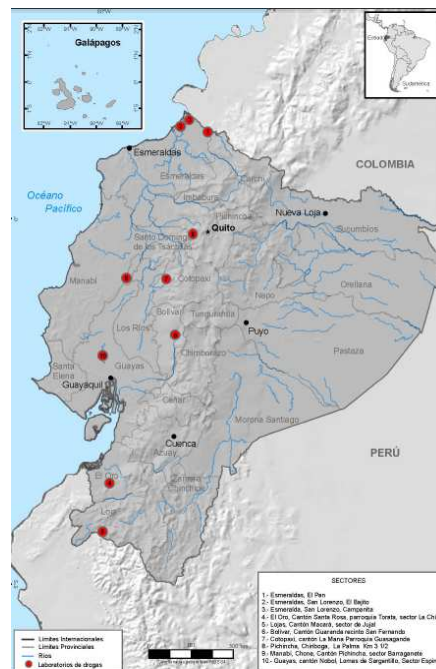
La UNODC también estima que en el mundo existen cerca de 18.800 centros de procesamiento de coca, de los cuales 18.780 se encuentran en América Latina. También lo ha posicionado a Ecuador en el sexto lugar de países con mayores laboratorios de procesamiento de coca. Se tiene conocimiento de

que en el año 2009 se dismantelaron 9 laboratorios, del año 2010 se conoce de 1, en el año 2011 se dismantelaron 13 laboratorios y en lo que va del año en curso, hasta Julio de 2012, se han encontrado 15 laboratorios. (Ecuador Inmediato, 2012).

La delincuencia internacional ha optado por la instalación de estos laboratorios para así reducir los gastos que representaría trasladar los alcaloides hacia otros sitios para su procesamiento, lo cual implica pagar a redes delictivas locales consideradas como las dueñas de las rutas "seguras" del narcotráfico.

La implementación de estos laboratorios ha tenido lugar en su mayoría en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Sucumbíos. Aunque se conoce de la existencia de otros sitios de procesamiento en la sierra centro del país. Con la instalación de los laboratorios se duplica la violencia ya que las organizaciones transnacionales del narcotráfico poseen redes de sicarios que participan en todas las etapas de producción de la droga y que cuentan con la complicidad de habitantes de las zonas donde éstos son levantados para darle continuidad al circuito, así unas refinan, otras vigilan y otras las llevan a los sitios de embarque.

GRÁFICO 11 SITIOS DONDE SE HAN ENCONTRADO LABORATORIOS DE PROCESAMIENTO DE DROGA



Fuente: UNODC
Elaborado por: UNODC

Por otra parte el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos difundido por Estados Unidos ha revelado que Ecuador exporta cerca de 270 toneladas métricas cada año, cuyo 60% está destinado al mercado estadounidense y el 40% restante se destina al consumo europeo. (Diario Hoy, 2012).

Tanto las cantidades de droga incautada como exportada han aumentado desde la salida de Manta del Puesto de Operaciones Avanzadas de Estados Unidos, conocido también como Forward Operating Location (FOL), por su nombre en inglés. Este hecho, a mi juicio personal, plantea dos preguntas curiosas: ¿Con la presencia de la FOL el flujo de sustancias estupefacientes en el país era inferior por existir un mejor nivel de control tanto de los cultivos, como de los laboratorios y las fronteras? o, ¿por razones geopolíticas y otras, se camufló y se limitó la información veraz acerca de esta realidad del narcotráfico dentro del territorio nacional?

2.2.3. Puertos, vías e interconexión de Ecuador con el narcotráfico

Los principales puertos de envío se localizan en la Costa. Hacia el Pacífico los más importantes son los de Puerto Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas. A éstos se suman por lo menos 20 puertos clandestinos que permiten la conexión internacional con los mercados de consumo. En los casi 700 km que componen el cordón fronterizo con Colombia y en los aproximadamente 1.500 km de límite con Perú, se han identificado pasos ilegales cuya topografía está caracterizada por caminos no carrozables como trochas, estrechos y puentes colgantes que también han sido habilitados para actividades relacionadas con el comercio de drogas, pertrechos militares, abastecimiento, entre otros. (Diario Hoy, 2012).

En un recorrido realizado por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior de Ecuador y Colombia, se identificaron 25 pasos ilegales que comunican informalmente a ambos países y que dividen a cerca de 50 poblaciones entre la provincia de Carchi y el departamento de Nariño. (Diario Hoy, 2012).

Por el lado de la frontera con Perú, se han detectado alrededor de 140 pasos ilegales utilizados de igual manera para el tráfico de drogas, combustibles y contrabando en general. La extensa frontera que separa a Perú y a Ecuador complica el control en el ingreso y salida de ilícitos por lo que Ecuador ha desempeñado el papel de plataforma para el acopio y envío de drogas a otros países. (El Comercio, 2012).

Para un país pequeño como el nuestro, estos hechos resultan ser nefastos para su imagen, tomando en cuenta que somos una nación pequeña en territorio, en población y en economía (comparándola a esta última con las de los mayores productores de estupefacientes y con las de los mayores consumidores).

2.3. Ecuador dentro del enclave del crimen organizado

2.3.1. La categorización del país como centralizador del narcotráfico

El investigador Fernando Carrión Mena, Coordinador del Programa de Estudios de la FLACSO Sede Ecuador; ex Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y Editoralista del Diario Hoy, así como experto en temas de narcotráfico, seguridad ciudadana, políticas urbanas, desarrollo local y planificación, (Selected Works, 2012), ha definido al Ecuador como un *HUB* del narcotráfico, palabra que puede ser empleada para designar ámbitos de la informática, de transportes y de componentes de máquinas simples, pero con una lógica similar.

En informática un *HUB* o router es definido como un dispositivo que le da estructura y operatividad a los sistemas de redes, permitiendo su centralización para ampliarla y así interconectar varias computadoras o puertos USB para facilitar la transmisión simultánea de datos. (Definición ABC).

Un *HUB* también se refiere a puertos de intercambio de personas y mercancías que se movilizan largas distancias en medios de transportes aéreos o marítimos con gran capacidad. En lo que respecta a máquinas simples, un *HUB* es una pieza que ejerce las funciones de punto de apoyo y de giro de un eje como en el caso de una rueda. (Word Reference).

Esta definición parece ser la más completa y práctica para el rol que Ecuador ha venido desempeñando dentro de los circuitos del narcotráfico transnacional. La implementación del Plan Colombia movilizó a los grupos subversivos, a la población colombiana en calidad de refugiados (muchos de ellos ilegales, no registrados) y con ello, a una serie de fenómenos delictivos, entre ellos, el narcotráfico, con lo que el país asumió la función de un *HUB* que abrió nuevas rutas. (Diario Hoy, 2012).

Este *HUB* estableció nuevas alianzas en materia de producción, acopio, procesamiento y envío de sustancias ilícitas, reconfigurando así el sistema regional e incluso mundial de redes de carteles, mafias y bandas extranjeras que buscan

infiltrarse en el territorio nacional para expandirse a nivel regional. (Diario Hoy, 2012).

En virtud de esta categorización, Ecuador actúa como una arteria que posibilita el desarrollo de una compleja interdependencia transnacional con Colombia y con Perú. El país se ha colocado en una situación intermedia como punto de conexión que facilita la emisión y recepción de ilegalidad. Colombia, Ecuador y Perú, cada uno con un rol específico, han impulsado canales de comunicación interdependientes por donde fluye el narcotráfico.

2.3.2. Las aristas del problema

Se ha hablado de una posición geográfica que articula a Ecuador con el narcotráfico dentro de lógicas que desarrollan actos delictivos conexos, mencionados en líneas anteriores.

Primero: su ubicación, a más de estar entre los mayores productores y refinadores de coca en el mundo, la actividad delictiva internacional es posible debido a la permeabilidad de las fronteras, los puertos marítimos y fluviales donde existe una economía que ha sido inyectada por fuertes dosis de informalidad y que ha permitido corromper a funcionarios públicos, policías y militares, y otros agentes de frontera y de aduanas. (CARRIÓN, 2011).

En este punto cabe destacar que la frontera se torna más frágil ya que en lugar de colindar con las Fuerzas Militares de Colombia, lo hacemos con los frentes de los grupos irregulares e insurgentes, conocidos también como narco-guerrilla, por haber remplazado su ideología política inicial por intereses terroristas.

Segundo: su salida hacia el Pacífico, permite el abastecimiento de América del Norte (principal mercado de drogas del mundo donde se practica el 70% de las incautaciones de cannabis a nivel mundial, el 70% de las incautaciones totales de éxtasis y el 44% de las de metanfetamina) y de otros mercados en el oeste Asiático así como su articulación con el Oeste de México, donde el Cartel de Sinaloa tiene sus establecimientos más importantes. (JIFE, 2011).

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) conocida por su nombre en inglés como International Narcotics Control Board (INCB), en su último informe anual publicado en enero de 2012 señala que Canadá, Estados Unidos y México continúan presentando niveles elevados de producción, fabricación, tráfico y consumo de drogas ilícitas y que pese a que el mercado de cocaína en Estados Unidos ha disminuido considerablemente, el consumo anual bordea las 150 y 160 toneladas, lo que lo ha convertido en el mayor mercado ilícito de esta sustancia, constituyendo así el principal destino para la producción de esta sustancia en Sudamérica. (JIFE, 2011).

Tercero: la Amazonía ecuatoriana en su frontera con Perú, posee rutas fluviales que son un enlace clave para abastecer a Brasil, segundo consumidor mundial de coca. (JIFE, 2011).

Otra lógica está ligada a la moneda. La dolarización aceleró la inserción ecuatoriana en la globalización, la que crea un mercado global de bienes y servicios. Por el lado positivo, esto amplió la productividad de los agentes económicos así como la expansión de los espacios comerciales. Por el lado negativo también dinamizó circuitos de informalidad económica y financiera difíciles de controlar.

El paso de la droga por Ecuador le otorga la condición de país de tránsito, bodega para el acopio y procesamiento, origen, exportación y consumo doméstico. (JIFE, 2011).

2.3.3. La Amazonía como isla del narcotráfico

La Amazonía cubre un territorio tropical de más de 7.500.000 km cuadrados comprendidos en Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y una pequeña porción del territorio de Guayana Francesa. La realidad amazónica que estos 8 países comparten se fundamenta en altos y persistentes niveles de pobreza y desempleo, los cuales dificultan el acceso a servicios educativos dignos, poca o nula efectividad de los sistemas de salud,

vivienda, y por ende escasa cobertura en materia de Derechos Humanos. (CLAES, 2005).

Estos problemas sociales demuestran cómo algunos sitios de la Amazonía han sido controlados estatalmente, en gran medida, para llevar a cabo actividades incluidas dentro de los procesos de globalización legalmente reconocidos, tales como: actividad minera y petrolera, mientras que otros, han quedado relegados de los mismos.

En este contexto, las relaciones establecidas se han dado dentro de un marco local y/o transfronterizo, con lo que ha surgido la necesidad de sacar provecho de la riqueza de sus recursos naturales mediante la satisfacción de demandas ilícitas a través de cultivos de coca y amapola para la elaboración y tráfico de narcóticos.

De esta manera, la Amazonía se ha convertido en una región propicia para cadenas productivas globales ilícitas, siendo el narcotráfico la principal amenaza, particularmente para Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. (VEYRUNES, 2008).

El contrabando de estos precursores químicos constituye también un foco de amenazas ambientales principalmente por los impactos que la producción de coca y su conversión en cocaína generan debido a la utilización de químicos que aceleran el crecimiento de las plantas de coca y amapola, o por las fumigaciones realizadas para eliminar los cultivos ilícitos, cuya erradicación afecta la salud de las poblaciones aledañas. (Observatorio Desc Amazonía, 2008).

El narcotráfico se ha presentado como un negocio delictivo que convierte a los países que se encuentran bajo su influencia en colonias de carteles y mafias externas. Éste, tiene la creciente necesidad de robustecerse ya que no puede sostenerse solo, razón por la cual, desde el ámbito de la producción, se ha transformado en un problema común de los países andinos.

Se ha hablado de Ecuador como una plataforma internacional del tráfico de drogas, la misma que reúne a las economías legales e ilegales en una dualidad

que permite su camuflaje. Más allá de estar ubicado entre los dos mayores productores de cocaína en el mundo, la condición de Ecuador como frontera del crimen organizado permite la subsistencia de otras formas de esclavismo.

Agentes ajenos a este territorio se han apropiado de la tierra más rica en recursos naturales, y más vulnerable por la escasa presencia estatal, para convertir en esperanza la desesperación de las poblaciones más alejadas.

Resulta contradictorio creer que pese a los procesos de globalización, donde el ideal máximo es el desarrollo económico y social, las poblaciones de la frontera hayan quedado excluidas de estos ideales, para que el tráfico de sustancias ilícitas se insertara en la sociedad.

Sin embargo, si bien en el país se han dado las condiciones para que este negocio tenga lugar en el territorio nacional y en las fronteras, también se ha sabido identificar las falencias de las políticas públicas anteriormente aplicadas, con el objetivo de eliminar las brechas existentes entre los centros urbanos y las periferias y así, recuperar la rectoría pública de las políticas sociales a través de estructuras institucionales modernas que conlleven a la construcción de una nueva “ciudadanía” que nos impida caer en un esclavismo del siglo XXI.

El efecto transnacional del narcotráfico ha hecho que la región y de manera especial Colombia, Ecuador y Perú, sujetos de estudio en este capítulo, sientan los efectos recíprocos generados a partir del intercambio de sustancias ilícitas, así como del flujo de personas y de dinero ilegal que éste maneja en razón de estar integrados dentro de una amenaza que implica altos costos. Tal como Robert O. Keohane y Joseph Samuel Nye definen en la teoría de interdependencia, se trata de una nueva y diversa forma de interconexión humana por encima de las fronteras nacionales.

Ecuador, junto con sus vecinos, Colombia y Perú, convive en una región estratégica para el desarrollo de la industria del narcotráfico. El triángulo amazónico es el punto de convergencia de una relación de interdependencia en la que las sensibilidades son mutuas.

Sin embargo, las causas por las cuales Ecuador es un intermediario potencial para la comercialización de droga no deberían focalizarse únicamente en su ubicación geográfica o en la forma en la que resulta ser afectado por coyunturas externas. El bajo nivel de desarrollo en provincias como Sucumbíos, Napo, Orellana y Esmeraldas, las ha dejado en el olvido, de manera que su vulnerabilidad para ser puentes del narco se ha acentuado. A partir de esta actividad se genera ingresos económicos elevados, pero también se desprenden atentados contra la integridad de quienes la utilizan como medio de subsistencia.

El narcotráfico se ha convertido en la secuela de problemas sociales dentro y fuera de Ecuador. Dentro de éste debido al incipiente desarrollo en la región amazónica. Fuera del país, debido a la presencia de grupos insurgentes que financian su lucha guerrillera en función del incremento de los cultivos de coca en territorios colombiano y peruano y, finalmente, debido al aumento de las demandas progresivas en los países consumidores.

Ante esta amenaza interdependiente, en el siguiente capítulo, es necesario conocer la gestión que el Estado ecuatoriano, a través del CONSEP y su Consejo Directivo, ha venido desarrollando en materia de una prevención integral en cuanto a la presencia de drogas ilícitas en el país, mediante la creación de procedimientos, normas y asignación de competencias a determinadas instituciones, encargadas de regular y controlar este mercado transnacional.

CAPÍTULO III

LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE DROGAS Y EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

3.1. Marco jurídico y político en materia de drogas

3.1.1. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

En el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, se define al narcotráfico como el “tráfico ilícito” que incluye delitos penales de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, venta, envío, importación, exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica así como la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes. (UNODC, 1988).

Siguiendo el ejemplo de la comunidad internacional, a nivel nacional, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas fue promulgada el 17 de septiembre de 1990 en el Registro Oficial Nro. 523 y sus reformas fueron publicadas en el Registro Oficial Nro. 490 de fecha 27 de diciembre del año 2004. Tiene por objeto combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros generados por éstas. (Congreso Nacional, 2004).

Los planes, programas y actividades que a través de ella se adopten o ejecuten abarcan lo relativo al cultivo de plantas, materias primas e insumos, de los que se pueda extraer compuestos químicos para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas así como la adquisición y/o tenencia de sustancias sujetas a fiscalización para su uso, oferta, venta y distribución. (Congreso Nacional, 2004).

La Ley contempla asimismo los mecanismos de prevención del uso indebido de aquellas sustancias sujetas a fiscalización así como el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por su uso y/o posesión dentro de las competencias conferidas por los convenios internacionales firmados y ratificados por Ecuador, los organismos internacionales creados por los convenios internacionales en mención y el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. (Congreso Nacional, 2004).

Este cuerpo jurídico entiende por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización aquel que no tiene fines terapéuticos o investigativos. Sin embargo, y mediante disposición del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, la fabricación de drogas que contengan sustancias sujetas a fiscalización y cuyos fines sean científicos, de experimentación, adiestramiento del personal encargado de control, represión o rehabilitación, será posible a través de la adquisición de una licencia legal. (WHO, 2010).

Es así como de conformidad con lo establecido por dicho Comité, y una vez que las partes interesadas hayan aprobado un examen de solvencia técnica y moral, el CONSEP se encuentra en la facultad de emitir las licencias a aquellas entidades públicas o privadas que deseen cultivar plantas, elaborar o importar cualquier producto compuesto por sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siempre y cuando se justifique su identificación, origen y procedencia, propiedades, cantidad, peso y concentración. Cabe recalcar que de acuerdo a la legislación, estas autorizaciones tienen una vigencia máxima de 6 meses después de su concesión. (Congreso Nacional, 2004).

A través de esta Ley, el CONSEP es el responsable de llevar un registro actualizado de los establecimientos debidamente autorizados por la Ley Orgánica de Salud (Código Orgánico de Salud) para vender al público sustancias sujetas a fiscalización así como de regular los faltantes y excedentes. Estos centros podrán realizar las ventas únicamente dentro de las setenta y dos horas posteriores a la emisión de la respectiva receta o prescripción. (Congreso Nacional, 2004).

De igual manera, éstos tienen la obligación de registrar las existencias, consumo y ventas de sustancias sujetas a fiscalización importadas a través de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP así como de participar en un proceso de rendición de cuentas en cualquier momento en el que el CONSEP lo dictamine. (Congreso Nacional, 2004).

En cuanto a las prohibiciones, éstas hacen alusión a la elaboración, fabricación, transporte, distribución, conversión, transferencia, encubrimiento y ocultamiento de bienes, equipos, materiales y toda clase de insumos que puedan ser empleados en el cultivo, la producción o transporte ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. (Congreso Nacional, 2004).

Asimismo se hace mención a la organización, incitación, oferta, corretaje o intermediación, administración indebida, injustificada y no consentida de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. La inobservancia de requisitos, falsificación y/o alteración de recetas, el enriquecimiento ilícito, la permisión de la impunidad, el cohecho, la intimidación, extorsión y toda clase de acciones de mala fe que involucren el cometimiento de delitos también están tipificados dentro de la presente legislación. (Congreso Nacional, 2004).

No obstante, las personas menores de veintiún años de edad, o quienes hayan actuado bajo presión, amenazas o violencia superables e incluso, quienes hallándose implicados en las infracciones previstas por esta Ley, proporcionaren a la Policía Nacional, Ministerio Público o jueces competentes información precisa y veraz que condujere a descubrir presuntos culpables de actividades ilícitas, recibirán un tratamiento especial. (Congreso Nacional, 2004).

En lo que respecta a las actuaciones pre procesales, al CONSEP le corresponde la atribución de retener y aprehender sustancias cuyo tráfico se encuentre prohibido en esta Ley, de asignar en comodato o de vender en pública subasta cualquier medio de transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial por medio del cual los precursores hayan ingresado al territorio nacional así como los bienes muebles e inmuebles de propiedad de los autores, cómplices y encubridores de las infracciones previstas en esta Ley, que hayan sido utilizados para la comisión del delito u obtenido en beneficio de éste, previo informe pericial favorable tanto de la Contraloría General del Estado como de la Procuraduría General del Estado. (Congreso Nacional, 2004).

En lo referente al dinero utilizado para la comisión de los delitos inherentes a la materia en cuestión o que fuesen rédito de ellos, tendrá que ser depositado en el lapso de las veinticuatro horas siguientes a su incautación en la Cuenta Especial de Depósitos del CONSEP en el Banco Central del Ecuador. (Congreso Nacional, 2004).

Los recursos económicos fruto de las ventas en subasta pública serán destinados a la formación de un fondo cuyos intereses e inversiones serán acreditados por el Banco Central del Ecuador en las cuentas de la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, el CONSEP, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA). (Congreso Nacional, 2004).

Éstos no podrán ser destinados al financiamiento de gastos corrientes sino que serán divididos de la siguiente manera: 50% para la Policía Nacional a fin de luchar contra el narcotráfico; 15% para el CONSEP con el propósito de dar cumplimiento a los fines que la Ley le ha asignado a este organismo; 20% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, con la finalidad de continuar con los procesos de rehabilitación de los internos de los respectivos establecimientos; el 15% restante deberá distribuirse proporcionalmente entre el Instituto Nacional del Niño y la Familia, el Consejo Nacional de las Mujeres (actualmente en transición hacia la conformación del Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género), el Consejo Nacional de Discapacidades y los Hospitales Psiquiátricos Lorenzo Ponce de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Julio Endara de Quito. (Congreso Nacional, 2004).

Para juzgar los delitos tipificados en esta Ley se aplicarán las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Los años de reclusión así como el monto de las multas dependerán de la gravedad de la infracción. La reclusión puede ir desde los tres años hasta los dieciséis años y en caso de penas acumuladas la reclusión puede alcanzar un máximo de veinticinco años. El monto de las multas puede ir de quince hasta ocho mil salarios mínimos vitales (Salario Básico Unificado). (Congreso Nacional, 2004).

3.1.2. Tolerancia al consumo de drogas ilícitas y posibles razones para permitir su legalización

Desde el año 1997 dejó de criminalizarse el uso y consumo de drogas y de considerarse a los adictos a sustancias estupefacientes y psicotrópicas como delincuentes. Sin embargo, existe una distancia preocupante entre la situación deseada y la situación vigente. (DELGADO, 2012).

Los delitos relacionados con la droga constituyen la principal causa de detención en la población carcelaria tanto femenina como masculina. Hasta el año 2009, se tiene conocimiento de que las personas privadas de libertad, por delitos en contra de la ley antidrogas representaban el 34,3% del total de la población. De este total el 47% correspondía a tráfico de drogas, el 40,7% debido a tenencia de drogas, el 9,5% en razón de tráfico y tenencia, mientras que el 2,8% por otros delitos inherentes a esta Ley. Asimismo, las drogas más consumidas en los Centros de Rehabilitación Social del país son: la marihuana (28,4%), la cocaína (10,8%) y la pasta base (10,6%). (CONSEP et al., 2007).

Para el año 2012, de acuerdo a lo dialogado con la Doctora Alexandra Delgado, Directora Nacional de Control de la Demanda del CONSEP, según reportes de la Defensoría Pública, el 95% de los detenidos fueron privados de su libertad debido a la tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes. De igual manera, existen cerca de 55.000 presos en las cárceles, por uso y consumo de drogas ya que con el actual Código Penal, una persona puede ir a prisión por un lapso de doce a dieciséis años sin importar la dosis que tenga en su poder. (CONSEP et al., 2007).

Esta realidad pone de manifiesto los vacíos de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas posiblemente porque las autoridades nacionales carecían de los insumos necesarios en los años 90 como para poder identificar qué cantidades podrían abastecer el micro tráfico, qué cantidades el narcotráfico y cuáles el consumo personal, lo cual acarrea inconsistencias ya que se priva al individuo en cuestión de recibir el tratamiento. (CONSEP et al., 2007).

Durante el año 2012, la Asamblea Nacional analizó el artículo 201 del Proyecto de Código Integral Penal, el mismo que plantea la despenalización de la tenencia de proporciones limitadas de drogas permitiendo así el portar las siguientes cantidades máximas:

TABLA 3
PROPUESTA DE REFORMA CÓDIGO INTEGRAL PENAL

PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL	DROGA	CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA
	<i>Marihuana o Hachís</i>	<i>10 gramos</i>
	<i>Pasta Base de Cocaína (PBC)</i>	<i>2 gramos</i>
	<i>Cocaína</i>	<i>1 gramo</i>
	<i>Heroína</i>	<i>0.1 gramo</i>
	<i>Éxtasis</i>	<i>0.015 gramos</i>
	<i>Anfetaminas</i>	<i>0.40 gramos</i>

Fuente: Código Integral Penal
Elaborado por: Carolina Costa García

Si llegara a existir un excedente en las cantidades permitidas por esta reforma, el portador tendrá que cumplir con una reclusión de 1 a 3 años e incluso hasta 25 años de detención si es que existe involucramiento con redes internacionales de narcotráfico. (DELGADO, 2012).

De acuerdo al criterio de la Doctora Alexandra Delgado, el fenómeno de las drogas ha sido invisibilizado a través de su institucionalización en cárceles o centros de tratamiento y en todo aquello que como sociedad le afecta o le duele al individuo, por cuanto la adicción no se centra en un solo sujeto sino en la sociedad entera, la misma que no ha sido capaz de verbalizar lo que le sucede o lo que de alguna manera le pertenece. (DELGADO, 2012).

El tema de las drogas se lo ha usado legal o ilegalmente. En este aspecto la Doctora Alexandra Delgado se refirió al padre José María Di Paola, quien cumple su misión en las Villas Argentinas. Durante un debate con el padre Di Paola sobre legalización y penalización de drogas, éste había mencionado que en las favelas de Brasil y en las villas de Argentina se consumían drogas con o sin permiso y que no existía agente policial que pudiera entrar en esos lugares debido a la ausencia de vigilancia sobre el tema, no porque existieran deficiencias en las

tareas de control sino porque se trata de una vigilancia que trasciende las capacidades de las autoridades. Así, el tema desborda lo ilícito y lo lícito. El verdadero abordaje va por lo social. (DELGADO, 2012).

En tal virtud la posición del CONSEP se niega a darle un tratamiento al tema desde la esfera criminal dentro de un Código Penal, e insiste en hablarlo en el marco de un Código de Salud en el que se pueda tener un abordaje integral y totalmente regulado. (DELGADO, 2012).

En este sentido, el CONSEP ha emitido para análisis de la Asamblea Nacional una propuesta de prevención integral y una reforma de una ley sustitutiva que permita comprender mejor la realidad de la cotidianidad de los usos. Sin embargo, los eslabones o vacíos jurídicos rebasan las capacidades nacionales. (DELGADO, 2012).

3.1.3. El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y el Observatorio Nacional de Drogas (OND)

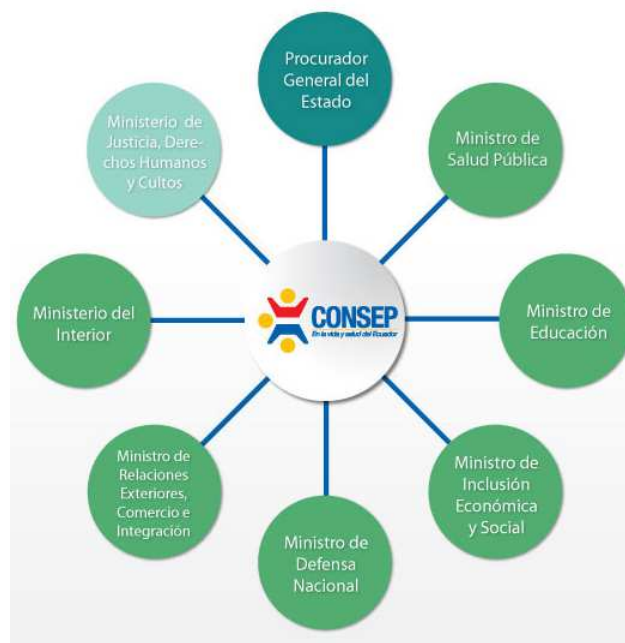
Para contar con los recursos humanos y financieros que permitieran enfrentar la globalidad del fenómeno de las drogas, la División Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (DINACONTES), cuyo funcionamiento se dio durante el período comprendido entre 1983 y 1990, pasó a ser remplazada por el CONSEP, institución pública creada a partir del artículo 8 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, elaborada por la Procuraduría General del Estado y aprobada el 7 de agosto de 1990 por el Congreso Nacional durante el mandato del aquel entonces Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Doctor Rodrigo Borja Cevallos. (CONSEP, 2012).

Su responsabilidad máxima es la de coordinar la formulación e implementación de la Política Nacional de Prevención y Control de Drogas a través de dos instancias cuyas funciones están definidas por la Ley Antidrogas. (CONSEP, 2012).

La primera, el Consejo Directivo del CONSEP, presidido por el Procurador General del Estado o su delegado y por un equipo interinstitucional conformado

por los Ministerios del Interior, Educación, Salud Pública, Bienestar Social (hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social), Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, o sus respectivos delegados, quienes mediante su trabajo intersectorial, deben discutir los temas prioritarios que garantizarán la aplicación, supervisión y evaluación de la Política y el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, a través de la ejecución de programas y actividades. (CONSEP, 2011).

GRÁFICO 12
CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEP



Fuente: CONSEP
Elaborado por: CONSEP

Entre otras de las atribuciones que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas le confiere al Consejo Directivo del CONSEP están las de elaborar el proyecto de presupuesto de la institución para que éste sea puesto a consideración, revisión y aprobación del Presidente de la República. (Congreso Nacional, 2004).

Por otro lado tiene a su cargo la designación de comisiones especiales así como evaluar la conveniencia de la suscripción y adhesión del país a convenios internacionales de cooperación internacional económica, científica, técnica y social en materia de drogas. Una vez suscritos los convenios, el Consejo Directivo tendrá

que evaluar la gestión pública mediante la identificación de las brechas existentes entre la situación actual y la situación deseada. (Congreso Nacional, 2004).

La segunda instancia se trata de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, reconocida como un organismo administrativo, técnico, operativo y financiero que ejerce la personería jurídica y la representación legal de la institución. Actualmente está presidida por el Ing. Rodrigo Vélez Valarezo, Secretario Ejecutivo del CONSEP, en calidad de representante legal de la institución quien es elegido y libremente removido por el Consejo Directivo. (Congreso Nacional, 2004).

El CONSEP cuenta a su vez con un Observatorio Nacional de Drogas, a través del cual realiza estudios e investigaciones sobre el uso y consumo de drogas en el país a fin de consolidar información veraz que oriente la toma de decisiones y el diseño de estrategias de intervención preventivas. (OND, 2012).

El Observatorio es el encargado de difundir la información recabada en los ámbitos nacional e internacional y de esta manera gestionar una cooperación técnica que involucre el desarrollo de investigaciones con los Observatorios de otros países para lograr una comprensión global del fenómeno. (OND, 2012).

Por otro lado, el Observatorio Nacional de Drogas también ha dado impulso a investigaciones que ponen en descubierto las distintas manifestaciones de las drogas para una mayor comprensión de las causas que generan su dependencia e incidencia en el uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización así como a estudios de los usos potenciales de plantas silvestres con un alto grado de valoración ancestral por sus propiedades medicinales y terapéuticas. (OND, 2012).

Sobre lo anterior se puede evidenciar el compromiso de hacer efectivo el objetivo ocho del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el mismo que establece la afirmación y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad a través del reconocimiento, valoración y protección de los conocimientos, saberes y prácticas culturales, ancestrales e históricas, de los hombres y las mujeres de los pueblos indígenas,

afro ecuatorianos y montubios, así como de los diferentes colectivos culturales de Ecuador. (SENPLADES, 2009).

Parte de la gestión del CONSEP también se centra en el cumplimiento de dos de los doce objetivos nacionales del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, los mismos que también forman parte de las agendas y políticas sectoriales e intersectoriales de los Ministerios de Gobierno. (DELGADO, 2012).

Uno de éstos es el segundo objetivo planteado por el PNBV: “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” de manera que se brinde una atención adecuada, oportuna e integral a la salud así como una educación de calidad con amplio acceso a la información en pos del desarrollo de habilidades investigativas, conocimientos científicos y se promueva el deporte como actividad física que fortalezca las capacidades y potencialidades de la población. (SENPLADES, 2009).

Otro de los objetivos nacionales enmarcados en el PNBV es el tercero, el mismo que plantea “Mejorar la calidad de vida de la población”. Mediante la consecución de este objetivo, se persigue crear las condiciones necesarias que satisfagan las necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas de la población ecuatoriana. (SENPLADES, 2009).

En virtud de lo anterior, el fenómeno de las drogas constituye un obstáculo para el desarrollo integral de las sociedades, atentando de esta forma contra la potencialidad de la ciudadanía y la calidad de vida de la población, razón por la cual su tratamiento debe ser una prioridad al momento de formular políticas nacionales y un aspecto en el que la planificación estatal vigente debe continuar fortaleciéndose.

3.1.4. Política Nacional de Lucha contra la Droga

Luego de que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) recomendara al Ecuador realizar los esfuerzos necesarios para asegurar un adecuado respaldo presupuestario en apoyo al plan nacional

antidrogas, el Ex Presidente de la República del Ecuador, Ingeniero Lucio Gutiérrez, mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 1180 el pasado 15 de diciembre de 2003, y su publicación en el Registro Oficial Nro. 239 del 24 de diciembre del mismo año, estableció como Política Permanente del Estado, la lucha contra las drogas y sus efectos. (CICAD, 2003).

Dicha lucha se centra en el propósito de generar ambientes sanos con una tendencia hacia el desarrollo humano sostenido y sustentable, siendo su consecución una responsabilidad compartida entre la Administración pública y la ciudadanía, para lo cual se requiere que en el Estado exista descentralización y desconcentración. (CICAD, 2003).

Subraya además la necesidad de contar con estrategias que modernicen la legislación dentro del ámbito de la problemática de este fenómeno, así como apuntar a dotar de solidez a los organismos y capacitar al capital humano tanto en materia judicial, como policial y de gestión. (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2004).

Las estrategias deben ser fruto de la recolección de indicadores estadísticos cuantitativos y cualitativos que permitan aterrizar en la realidad para lograr una planificación basada en metas, las mismas que conduzcan a la prevención del consumo y del delito. (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2004).

La política nacional de lucha contra la droga también acoge la participación de organizaciones no gubernamentales y de instituciones privadas, de manera que éstas puedan sumarse para aprovechar sus fortalezas y recursos. La intervención de organismos regionales e internacionales asimismo debe respaldar aquellos acuerdos y convenios de asistencia recíproca y cooperación para unificar procedimientos en un contexto que trascienda la esfera nacional. (Registro Oficial, 2004).

La creación de un espacio de participación comunitaria es un lineamiento clave ya que la esencia de la prevención de la drogadicción está en el acceso a

programas educativos e informativos así como en la promoción de la rehabilitación, recuperación y reinserción social de los consumidores. (CONSEP, 2011).

Para cristalizar la Política Nacional de Lucha contra la Droga, y de acuerdo al objeto de la Ley 108, se requiere de la formulación de un Plan Nacional de Control y Prevención de Droga que permita combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. (CONSEP, 2011).

Desde el año 1980 el país cuenta con un plan que incida en el largo plazo. Sin embargo, éste ha tenido que ser reformado en espacios circunscritos al plazo de 4 años debido a la realidad cambiante en los ámbitos nacional e internacional, pero sobre todo, ante la constante evolución de los delitos del crimen organizado. (CONSEP, 2004).

3.2. Marco normativo y mecanismos de implementación de la política pública en materia de drogas

3.2.1. El Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas

Jurídicamente y de conformidad con los artículos 8 y 13 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, corresponde al Consejo Directivo del CONSEP la elaboración del Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas. (Congreso Nacional, 2004). Constitucionalmente, éste encuentra su sustento en los artículos que figuran en la tabla a continuación:

TABLA 4
ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE DORGAS CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008	ARTÍCULO	TEXTO
	<i>Art. 32.-</i>	<i>La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.</i>
	<i>Art. 46.- (Inciso quinto)</i>	<i>El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.</i>
	<i>Art. 275.- (Inciso segundo)</i>	<i>El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.</i>
	<i>Art. 364.- (Inciso quinto)</i>	<i>Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.</i>

Fuente: Constitución Política del Ecuador
 Elaborado por: Carolina Costa García

Para poner en marcha y hacer efectivos los artículos enmarcados en la Constitución Política de la República del Ecuador, el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas constituye una mesa de discusión que incorpora a actores estatales y de la sociedad en función de los principales ejes sobre los cuales ha direccionado sus estrategias.

En tal virtud, se aborda la problemática de las drogas a través del control de la oferta, la reducción de la demanda y la promoción del desarrollo alternativo preventivo con el objeto de reducir el consumo de sustancias psicoactivas, contraer sus efectos en las personas afectadas, vigilar y detener el tránsito de sustancias ilícitas por el territorio nacional, así como prevenir y controlar la

producción de cultivos ilícitos y drogas sintéticas. (CONSEP, 2011). En lo que se refiere al marco legal de este plan, también está orientado al cumplimiento de lo dispuesto en los siguientes cuerpos jurídicos: (CONSEP, 2011).

TABLA 5
ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE DORGAS CON LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

LEY	LIBRO/TÍTULO/CAPÍTULO	ARTÍCULO	TEXTO
Ley Orgánica de Salud	Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia.	Art. 38.-	<i>Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.</i> <i>Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.</i>
Ley Orgánica de Educación Intercultural	Título I. De los Principios Generales. Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines.	Art. 3.- (Literal n)	<i>Son fines de la educación la garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo.</i>
Ley Orgánica de Educación Superior	Título IV. Igualdad de Oportunidades. Capítulo 2. De la garantía de la igualdad de oportunidades.	Art.86.- (párrafo tercero)	<i>Unidad de bienestar estudiantil.- Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.</i>
Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco	Título Preliminar. Del objeto y ámbito.	Art. 1.- Objeto.-	<i>La presente Ley tiene por objeto promover el derecho a la salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de las consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos.</i>

LEY	LIBRO/TÍTULO/CAPÍTULO	ARTÍCULO	TEXTO
Código de la Niñez y la Adolescencia	Título IV. De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes.	<i>Art. 78.- (numerales 1, 2 y 3)</i>	<i>Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las sustancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 3. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o su integridad personal.</i>
Ley del Deporte, Educación Física y Recreación	Título X. De la infraestructura.	<i>Art. 147.-</i>	<i>Publicidad y Consumo. Se prohíbe la propaganda y publicidad que promueve el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; tabaco o sus derivados, bebidas alcohólicas, excepto las bebidas de moderación las cuales deberán contener expresamente mensajes de responsabilidad explícitos y adicionales a los exigidos por la ley que desalienten el consumo irresponsable, así como el consumo por menores de edad. Se prohíbe el ingreso, comercialización y consumo de todos los productos derivados del tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bebidas alcohólicas, excepto de bebidas de moderación; en los eventos deportivos, así como el ingreso de personas bajo los efectos negativos de las drogas o en estado etílico.</i>
Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos	Disposiciones reformativas y derogatorias. Disposición transitoria.		<i>Los bienes que hubieren estado bajo administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y aquellos que en adelante sean objeto de medidas cautelares dictadas dentro de procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos, quedarán bajo custodia y resguardo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad de mero depositario, hasta que los mismos sean entregados, en el plazo máximo de ciento ochenta días, a la institución pública especializada que sea creada para administrarlos.</i>

Fuente: Legislación ecuatoriana
Elaborado por: Carolina Costa García

Estas leyes asimismo encuentran su punto de intersección en los objetivos 2 y 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir: “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y “Mejorar la calidad de vida de la población” respectivamente. (SENPLADES, 2009).

Dentro de este último tenemos la política 3.1 de “Promover prácticas de vida saludables en la población” cuyos lineamientos se enfocan en la aplicación de programas de información educativos y comunicacionales que promuevan entornos y hábitos de vida saludables así como dar seguimiento a la calidad e inocuidad de los productos y así fortalecer las acciones de prevención de adicciones de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo. (SENPLADES, 2009).

3.2.2. Reducción de la Oferta y Reducción de la Demanda

En Ecuador, la problemática de las drogas es vista desde los ámbitos de la oferta y de la demanda. Según la tercera y última Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Hogares, 2008, elaborada por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y representada en una población comprendida entre los 12 y 65 años de edad, de ciudades pobladas con más de treinta mil habitantes, la edad de inicio de consumo de alcohol y otras drogas se da a los 12,8 años. (CONSEP, 2011).

De esta muestra, el 40,20% indicó estar bien informado sobre las drogas, y el 59,80% reconoció estar poco o nada informado. En el caso de los estudiantes universitarios, Ecuador es el segundo país con mayor porcentaje de uso de marihuana con un 1,78%. En cuanto a la cocaína, ésta no supera el 1%. En lo que se refiere a inhalantes, nuestro país presenta el segundo porcentaje más bajo de uso en la región con menos del 1%. Esto no sucede con la pasta base de cocaína, de la cual, Ecuador es el segundo porcentaje de mayor uso, con un 0,11%. (CONSEP, 2011).

En lo que respecta al control preventivo de sustancias catalogadas, hasta enero de 2011, se tiene conocimiento de 1.644 personas naturales y jurídicas

calificadas para su manejo industrial y comercial. Nuestro país autorizó en el año 2010 la importación de 35.091.451,11 sustancias catalogadas. (CONSEP, 2011).

Por otra parte, desde el año 2008 hasta el año 2012, Ecuador ha registrado un cupo promedio de 7,55 Kg de morfina autorizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de los cuales ha importado 3 Kg. De éstos, el 33% corresponde a transacciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y el 67% a los laboratorios farmacéuticos y casas de representación. (CONSEP, 2011).

Para minimizar los daños y efectos causados por un fenómeno global como el de las drogas, el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas se ha propuesto metas con el propósito de mantener la edad promedio del primer uso de estas sustancias en los cantones intervenidos, incrementar al 50% los pacientes con tratamiento por consumo problemático, incrementar al 40% los pacientes que finalizaron su tratamiento y participaron en procesos de formación laboral, incrementar al 41% las empresas calificadas para el manejo industrial y comercial de sustancias catalogadas, con fiscalización por procesos, mantener en menos de 25 hectáreas los cultivos de coca, amapola y marihuana para garantizar que Ecuador se mantenga como país libre de cultivos con destino ilícito de acuerdo al parámetro de la Organización de las Naciones Unidas, prevenir el crecimiento del número de laboratorios ilícitos de producción de drogas en el territorio nacional y controlar su tráfico en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, autorizados y clandestinos. (CONSEP, 2012).

Para su cumplimiento, se han lanzado programas que abarcan la parte del individuo en lo que respecta al uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, su atención, tratamiento, recuperación y reinserción social así como un desarrollo alternativo preventivo para aquellos grupos en situación de riesgo frente a la temática de las drogas. El Estado tiene previsto invertir \$105.245.684 a escala nacional. (CONSEP, 2012).

En lo que respecta a las sustancias, los proyectos comprenden un sistema informático en línea para el control del uso terapéutico de medicamentos que contienen sustancias catalogadas y otros como el control de la producción,

fabricación, tráfico y oferta ilícitos de droga en el interior del territorio nacional, franja fronteriza, espacios acuáticos y espacio aéreo nacionales y la optimización en la administración de los bienes incautados por el Estado. (CONSEP, 2012).

Cabe recalcar que estos programas han sido planteados en el año 2011 con la actualización del plan. El plan 2009-2012 muestra más un referente teórico antes que operativo. Sin embargo, el CONSEP continúa perfilando su ámbito de acción desde la temática del sujeto.

Pese a que a través de estos programas se ha logrado capturar más traficantes, decomisar más drogas, destruir más hectáreas y laboratorios, aún no se ha logrado disminuir la disponibilidad de la droga para su consumo o su demanda.

Los recursos se destinan en su mayoría a programas de reducción de la demanda mediante campañas informativas mientras que los programas de tratamiento cuentan con menor apoyo.

3.2.3. Desarrollo Alternativo Preventivo

Para generar un plan de desarrollo alternativo preventivo muchas veces es necesario acudir a una resignificación del fenómeno de drogas ya que desde diferentes instancias se puede “prevenir”. Sin embargo ¿qué es prevención? Algunos sujetos podrán prevenir el consumo, mientras que otros el tráfico o el cultivo. En ocasiones este término no aterriza en su verdadero significado. (DELGADO, 2012).

Lo que el CONSEP propone es que los programas respondan a las necesidades de los sujetos y colectivos, dentro de sus contextos históricos, culturales, sociales, políticos e incluso de la época, por cuanto no es lo mismo el uso de drogas que se dio en los años 70 con el uso que se da en la actualidad, mucho menos el uso de drogas que se tiene desde la urbanidad, al uso que se da en zonas del oriente, donde una planta como la Ayahuasca genera un contacto

“mucho más profundo” desde la cosmovisión indígena de la Amazonía. (DELGADO, 2012).

El fin máximo no es la imposición de la abstinencia sino el desarrollo de las capacidades del individuo, aunque es necesario trabajar en la reducción de los daños generados por aquellos usos que se han convertido en conflictivos. Según la Organización de las Naciones Unidas en la categoría de usuarios problemáticos solamente un 0,1% de la población ha manifestado este tipo de adicción. De esta manera una prevención no puede basarse en prevenir el consumo o prevenir la drogodependencia sabiendo que los consumidores problemáticos a nivel mundial se encuentran agrupados en este 0,1% poblacional. (DELGADO, 2012).

Lo que los modelos preventivos buscan hacer, es brindar espacios para la reflexión y para el diálogo y de manera especial para generar un debate en cuanto a lo que realmente sucede con el fenómeno de las drogas para prevenir la exclusión social, ya que en nombre de la “guerra contra las drogas” se han producido varias persecuciones, muchas de ellas por rango de edad, donde los adolescentes han sido los mayores perseguidos. Incluso se han levantado persecuciones por contextos de situaciones de pobreza, migrantes o gente con otras características, siendo vistos a través de la lupa del uso conflictivo de drogas. (DELGADO, 2012).

Esta propuesta se aparta de las preocupaciones de los modelos económicos o de la licitud o ilicitud de algo que rebaza lo legal para su comprensión. Primeramente se genera un análisis sobre el individuo y sus decisiones, razón por la cual los programas de prevención deben desarrollar capacidades, ante todo aquellas de la autonomía y de la toma de decisiones de los sujetos para crear una sociedad madura y ser testigos de su crecimiento. (DELGADO, 2012).

El ser humano no es sólo interdependiente en economía o en comunicaciones. Lo es también en el campo de las aspiraciones humanas. En este contexto, y puesto que el individuo forma parte de una colectividad, el tema de la prevención cuenta también con un enfoque en el que se reduzcan los daños de

consumo y se promueva un uso responsable donde el sujeto no exponga su propia integridad ni la de los demás ya que constituye parte de una red social. Esta interdependencia de los sujetos, incide en la política pública estatal y viceversa.

Elizabeth Rivadeneira, Coordinadora de la Estrategia Reducción del Consumo Nocivo de Alcohol y otras adicciones del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, complementó esta idea al mencionar que las estrategias también deben tener resultados interdependientes mediante la aplicación de actividades que promuevan el autoestima del individuo, la comunicación acertada, el involucramiento de los padres de familia, de la comunidad, de los centros educativos, no únicamente con el fin máximo de evitar el consumo de drogas, sino de intervenir en otras aristas como lo son la violencia y la pobreza. Sólo así, el individuo tendrá la posibilidad de desarrollar sus destrezas y habilidades, pero sobre todo su capacidad de elección, ya que en el peor escenario, existe la posibilidad de que la gente termine consumiendo drogas, pero previamente consiente de cuáles serían las consecuencias para su salud y para el sistema del que forma parte.

3.3. Trabajo intersectorial a nivel nacional y Cooperación Internacional en materia de drogas

El artículo 416 de la Constitución Política del Ecuador en el título VIII sobre Relaciones Internacionales, dentro de su capítulo primero sobre el principio de las relaciones internacionales, señala que *“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores”* (Asamblea Constituyente, 2008: 181).

En este contexto, el numeral 9 inserto en el mismo artículo indicado reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de éstos. (Asamblea Constituyente, 2008).

Sobre lo anterior, el artículo 4 de la Política Nacional de lucha contra la droga señala que la colaboración internacional, será vista como acción de fortalecimiento para que en el ámbito regional e internacional en general, se

promueva una labor mancomunada, respaldada en acuerdos y convenios, que permita unificar procedimientos, coordinar acciones, compartir información, proveer de asistencia judicial recíproca y, en general, cooperar conjuntamente en la lucha contra la droga, sobre la base de los convenios y acuerdos existentes y aquellos que en el futuro fueren necesarios. (Registro Oficial, 2003).

Asimismo, y en concordancia con la Constitución, el objetivo 5 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 nos habla sobre garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.

En tal virtud, el país es sujeto de observancia de tratados, convenciones y protocolos internacionales que determinan competencias que conduzcan al control básicamente en el ámbito de la oferta de drogas. (OEA, 2011).

TABLA 6
CONVENCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS FIRMADAS Y/O RATIFICADAS POR ECUADOR EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

PAÍS	Convención contra la delincuencia organizada transnacional	Convención única sobre Estupefacientes 1961	Convención sobre sustancias sicotrópicas de 1971	Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas	Convención contra la corrupción
ECUADOR					

	Firma sin ratificación
	Firma con ratificación

Fuente: CICAD
Elaborado por: Carolina Costa García

En este sentido, la política 5.7 del objetivo 5 del PNBV pretende combatir la delincuencia transnacional organizada en todas sus manifestaciones y para ello, su lineamiento **a.** busca reforzar la prevención y sanción de delitos de trata de personas, tráfico internacional ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, combustibles, armas y bienes patrimoniales tangibles e intangibles, así como el lavado de activos. Por su parte el lineamiento **c.** persigue controlar el uso,

distribución y comercialización de precursores químicos respectivamente. (SENPLADES, 2009: 264).

Sin embargo, en este contexto, Alexandra Delgado habló de una dificultad en el ámbito internacional con respecto a los Objetivos del Milenio, de manera especial a aquellos que están destinados a cumplirse por los Ministerios de Salud Pública de los distintos países de la región y dentro de los cuales no está contemplado el tema de las drogas, lo cual impide que los Gobiernos le den un amplio tratamiento al tema. (DELGADO, 2012).

Esto explicaría por qué en la última Cumbre de las Américas llevada a cabo en abril de 2012, los Gobiernos instaron a los organismos internacionales a dar una mayor atención al tema mediante la promoción de debates de manera que éste sea abordado a un alto nivel regional a través de una nueva política de drogas con una visión actualizada mucho más flexible. El reto aquí sería promover políticas consensuadas con todos los países de la región, lo cual resulta presentar dificultades debido a las distintas comprensiones sobre el tema. (DELGADO, 2012).

3.3.1. Estrategias de prevención y cooperación a nivel internacional

El fenómeno de las drogas constituye una problemática desprendida de numerosas aristas razón por la cual ha demostrado su transversalidad ya que factores como la pobreza, la salud, la educación y/o el desempleo han coadyuvado al agravamiento de esta realidad. La política nacional del Estado ecuatoriano se complementa a través de la Cooperación Internacional, la cual se caracteriza por su papel fundamental dentro del marco de las relaciones internacionales.

La UNODC, cuyo representante para Perú y Ecuador es el Señor Flavio Mirella, y cuya oficina tiene su sede en Lima, viene trabajando desde el año 2006 en la consecución de dos proyectos: el ECUI43 y el ECUK20. El proyecto ECUI43 denominado también “Prevención Integral de Drogas en Comunidades Urbanas”, se viene ejecutando con el apoyo del CONSEP como contraparte nacional, mientras que en el ECUK20 o “Programa piloto de prevención de drogas en los

Centros Femeninos de Rehabilitación Social de Quito, Guayaquil, Esmeraldas y en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero en Quito” la agencia gubernamental que lo implementa es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (UNODC, 2012).

En el primer caso, durante los años 2006 y 2007, el proyecto intervino en Quito, Guayaquil y Cuenca; posteriormente en Manta, Loja y Ambato. A partir de los años 2008 y 2009 el proyecto arrancó en Esmeraldas, Ibarra y Santa Cruz. Éste se desarrolla a través del programa “Formación de Formadores en Prevención Integral de Drogas”, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones tutelares del Estado y de la sociedad civil mediante la capacitación especializada en prevención de drogas. (UNODC, 2012).

Desde el año 2006 hasta marzo de 2012 el proyecto ha capacitado a cerca de 1.200 “Formadores en Prevención Integral de Drogas”, del sector público y privado tales como el CONSEP, los Ministerios de Educación, Cultura y Relaciones Laborales, la Policía Nacional, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), las Fuerzas Armadas, Municipios, Universidades, Iglesias locales, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Dirección de Rehabilitación Social, el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, centros y comunidades terapéuticas y refinerías estatales. (UNODC, 2012).

De igual manera, ha capacitado a personas de organizaciones de la sociedad civil tales como la Fundación “Más que Vencedores”, Fundación “Cristo de la Calle”, la ONG CONFIE (Consortio para la Familia y la Niñez Ecuatoriana), la Asociación Santa Rita de Casia, Pastoral Migratoria, CECAFEC (Centro de Capacitación y Formación para Educadores de la Calle), Curia Nación de Paz, Refugio de Jesús, entre otras. (UNODC, 2012).

Los “Formadores en Prevención Integral de Drogas” asimismo han replicado la estrategia mediante la capacitación de 5.000 líderes comunitarios como “Promotores en Prevención Integral de Drogas”, orientados a intervenir en el desarrollo comunitario, principalmente en los barrios. Cerca de 90.000 niños y

niñas, jóvenes, padres y madres de familia se beneficiaron indirectamente del proyecto al recibir orientación y sensibilización a través de actividades de carácter cultural, educativo, recreacional y comunitario. (UNODC, 2012).

Este proyecto se ha articulado con la implementación de la Constitución Política del año 2008 y por ende con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 mediante la capacitación de profesionales entrenados capaces de crear metodologías ajustadas a la realidad ecuatoriana y generando una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la promoción de estilos de vida saludables. Su accionar ha desembocado en una relación de interdependencia con el CONSEP y otros entes estatales consolidando un trabajo conjunto, de manera especial en los ámbitos educativo y comunitario. (UNODC, 2012).

En el segundo caso, el proyecto fue ejecutado durante el período 2008-2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, específicamente en el tema de prevención, tratamiento, reinserción y desarrollo alternativo. El objetivo del Proyecto fue el de prevenir el consumo de drogas en los Centros Femeninos de Rehabilitación Social de Quito, Guayaquil, Esmeraldas y en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero en Quito. Para este fin el proyecto ECU43 denominado también “Prevención Integral de Drogas en Comunidades Urbanas” brindó asistencia técnica para fortalecer las capacidades de 200 personas de la comunidad penitenciaria como personal administrativo, personal técnico, personal de seguridad, familias y visitas de las personas privadas de libertad así como atender a 1.000 personas privadas de libertad y adolescentes. (UNODC, 2009).

Por otro lado y fuera del ámbito de competencia de la UNODC, la cooperación internacional que recibe Ecuador no se limita a la materia del narcotráfico y el uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La cooperación internacional busca profundizar en las vertientes de un problema que ha desarrollado una estructura transnacional.

En capítulos anteriores se puso énfasis en el conflicto armado colombiano y la presión que grupos subversivos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares ejercen en territorios ecuatorianos fronterizos.

Para frenar la crisis humanitaria generada a partir del contrabando, la trata de personas, el desplazamiento forzado, la minería ilegal, la inseguridad y el crimen organizado, los mismos que han facilitado el desarrollo del narcotráfico en sus amplias manifestaciones, parte de la cooperación internacional recibida por Ecuador está destinada a una política de desarrollo y de paz en la frontera norte. (AGECI, 2010).

Durante los años 2008 y 2009, la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, AGECI, hoy Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, SETECI, reportó los siguientes rubros:

TABLA 7
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 2008-2009

PROVINCIA	PROYECTO	MONTO (USD)
Esmeraldas	203	67.31 millones
Imbabura	167	53.45 millones
Sucumbíos	104	39.59 millones
Carchi	95	37.61 millones

Fuente: AGECI (SETECI)
Elaborado por: Carolina Costa García

Entre los mayores cooperantes de Ecuador tenemos a los siguientes:

TABLA 8
ORGANISMOS Y PAÍSES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CON MAYOR INVERSIÓN EN ECUADOR 2008-2009

ORGANISMOS / PAÍSES	PORCENTAJE DE INVERSIÓN
Unión Europea	19,4%
Estados Unidos	18,8%
España	18,5%
ONU	17%
Bélgica	9,3%

Fuente: AGECI (SETECI)
Elaborado por: Carolina Costa García

Asimismo y mediante trabajo conjunto con la Secretaría Técnica del Plan Ecuador, se han identificado 4 esferas estratégicas para la cooperación en la frontera norte, consideradas las de mayor articulación al ámbito de prevención en materia de narcotráfico y uso ilícito de drogas.

TABLA 9
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE POR EJES DE ACCIÓN 2008-2009

EJES ESTRATÉGICO DE ACCIÓN	MONTO DE INVERSIÓN (USD)
Producción y empleo digno en el cual se prioriza a los mercados locales, alternativas productivas y nuevos productos promisorios.	41.73 millones
Cobertura y calidad de servicios que envuelve a la educación, salud, agua y saneamiento.	87.64 millones
Gestión ambiental, constituye un enfoque en las nuevas áreas protegidas, el fortalecimiento del control y el territorio ordenado.	55.61 millones
Cultura de la paz, está basado en los conflictos, la movilidad humana, la justicia y los asuntos binacionales.	4.36 millones

Fuente: AGECI (SETECI)
Elaborado por: Carolina Costa García

Según el Informe de Gestión Soberana de la Cooperación Internacional no Reembolsable correspondiente al año 2010, elaborado por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), el país recibió durante el año 2010, un total \$333.14 millones, con una cobertura de 810 proyectos a nivel nacional. (CONSEP, 2011).

3.3.2. Estrategias de prevención y cooperación a nivel regional

Ecuador se encuentra promoviendo su propuesta de adoptar un Sello Mundial de Desarrollo Alternativo Preventivo, el cual consiste en un mecanismo de responsabilidad compartida y de apoyo económico a iniciativas regionales para América Latina y el Caribe, Asia y África. (VÉLEZ, 2011).

Por su parte, el Grupo de los 77 y China han mostrado interés por la iniciativa ecuatoriana, la misma que había sido presentada en la XIII Reunión del Mecanismo de Cooperación y Coordinación en materia de drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, llevada a cabo el 29 de junio de 2011 en Bogotá. (VÉLEZ, 2011).

Esta iniciativa, a través de un sello mundial de desarrollo alternativo preventivo, anhela implementar un mecanismo dinamizador del mercado internacional a través de la protección, comercialización y consumo de productos de origen lícito, con valor agregado, y provenientes de áreas afectadas y vulnerables al cultivo, producción, acopio y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas destinadas al uso ilegal. (VÉLEZ, 2011).

Otro de los fines máximos es la generación y promoción de opciones económicas legítimas, viables y sostenibles que sustituyan y prevengan la proliferación de cultivos ilícitos, ámbito en el cual Ecuador viene trabajando desde la adopción del Plan Ecuador en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. (VÉLEZ, 2011).

Los fundamentos en los cuales se sustentan la adopción del sello mundial de desarrollo alternativo preventivo, DAP son la garantía que se les ofrecerá a los productores para que reciban un precio que traduzca una rentabilidad adecuada a la contribución de sus destrezas, trabajo y recursos, así como un porcentaje del beneficio total proporcional a su aportación.

3.3.3. Estrategias de prevención y cooperación a nivel nacional

En Ecuador, los Ministerios de Gobierno del área social parten de la premisa de que mediante la práctica de hábitos de vida saludables se puede mejorar la calidad de vida de la población. Es por esto que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social junto al CONSEP ha trabajado en la elaboración de una Estrategia Nacional Intersectorial de Reducción de Consumo Nocivo de Alcohol, Drogas y otras adicciones. (RIVADENEIRA, 2012).

Se trata de una iniciativa integradora en la que las gestiones realizadas por los Ministerios Coordinadores de Desarrollo Social, Producción, Seguridad y Patrimonio, la viabilizarán a través de los Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Interior, Agricultura, Ganadería y Pesca, Productividad; Cultura, Deportes, Turismo y finalmente la Secretaría Nacional del Migrante. (RIVADENEIRA, 2012).

La estrategia se centra sobre todo en dignificar los servicios ofrecidos por los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social de manera que se promuevan la prevención integral, el acompañamiento terapéutico y tratamiento de personas calificadas como usadoras problemáticas de alcohol y drogas. (RIVADENEIRA, 2012).

Ésta ha mostrado asimismo articulación con el trabajo comunitario en el país, de manera que los viejos patrones sociales y culturales ligados al consumo nocivo de alcohol y drogas puedan ser removidos. Para ello se han planteado las siguientes metas:

- Informar al 60% de la población respecto a consumo nocivo de alcohol y prácticas de vida saludables.
- Vincular al 47,9% de la población a programas y actividades de promoción de estilos de vida saludables para la reducción del consumo nocivo de alcohol.
- Crear las condiciones necesarias para que el 70% de asociaciones de productores de alcohol artesanal y el 50% de trapiches accedan a financiamiento a través del Instituto de Economía Popular y Solidario (IEPS).
- Lograr que el 60% de denuncias de mal funcionamiento o abuso en centros de tratamiento recibidas sean procesadas y resueltas.

Por su parte el CONSEP como ente rector de la política antidroga, coordinadamente por las instituciones miembros del Consejo Directivo ha desarrollado los siguientes 12 programas con sus respectivos componentes concernientes a lo que se debe trabajar en el tema de las drogas:

1. Programa Nacional de Prevención Integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. (CONSEP, 2011:13).
 - a. Definición del marco teórico relacionado a la prevención integral de drogas.
 - b. Implementación de la Red Nacional de Prevención Integral de Drogas.
 - c. Inclusión de organismos privados en la ejecución articulada de actividades de prevención.
 - d. Especialización de profesionales en prevención integral del uso y consumo de drogas.
 - e. Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos de prevención integral.

2. Programa Nacional de atención, tratamiento y recuperación de personas con adicción al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. (CONSEP, 2011:14).
 - a. Implementación de dieciséis centros públicos de recuperación.
 - b. Fortalecimiento de las unidades públicas de tratamiento ambulatorio.
 - c. Calificación y autorización de funcionamiento de los centros privados de recuperación.
 - d. Implementación de comunidades terapéuticas en los Centros de Rehabilitación Social, Casas de Confianza y Centros de Adolescentes Infractores.
 - e. Implementación de estándares de calidad en el sistema de atención, tratamiento y recuperación de personas con adicción al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
 - f. Capacitación de profesionales en manejo de pacientes con adicción al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
 - g. Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos de tratamiento y recuperación de personas con adicción al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

3. Programa Nacional de Reintegración Social para los sujetos recuperados. (CONSEP, 2011:14).
 - a. Implementación del sistema de reintegración social para los sujetos que cumplieron su proceso de recuperación.

- b. Capacitación de profesionales en reintegración social.
 - c. Capacitación laboral de sujetos recuperados.
 - d. Implementación de mecanismos para evaluar la efectividad de los proyectos de reintegración social para los sujetos que cumplieron su proceso de recuperación.
4. Programa Nacional de Desarrollo Alternativo Preventivo de los grupos en situación de riesgo frente a la temática de las drogas. (CONSEP, 2011:14).
- a. Definición de política y lineamientos de intervención del desarrollo alternativo preventivo.
 - b. Identificación y categorización de las zonas vulnerables a actividades ilícitas en el territorio nacional.
 - c. Implementación de propuestas técnicas de intervención en zonas vulnerables a las actividades ilícitas vinculadas con la temática de las drogas.
 - d. Inclusión de organismos privados en la ejecución articulada de proyectos de desarrollo alternativo preventivo.
 - e. Capacitación laboral de grupos de riesgo frente a la temática de las drogas.
 - f. Implementación de mecanismos para evaluar la efectividad de los proyectos de desarrollo alternativo preventivo.
5. Programa Nacional de Control de Sustancias Catalogadas. (CONSEP, 2011:15).
- a. Implementación del sistema nacional de control integral de sustancias catalogadas.
 - b. Implementación del sistema informático en línea para el control del uso terapéutico de medicamentos que contienen sustancias catalogadas.
 - c. Ejecución del plan de fiscalización a las personas naturales y jurídicas autorizadas para el uso de sustancias catalogadas mediante compras especiales.
 - d. Establecimiento de puntos de control de sustancias catalogadas en todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos habilitados.

- e. Implementación del Centro Científico de Referencia Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
- 6. Programa de coordinación entre interdicción, inteligencia y aplicación de leyes contra las drogas. (CONSEP, 2011:15).
 - a. Fortalecimiento del control de la producción, fabricación, tráfico y oferta ilícitos de droga en el interior del territorio nacional, franja fronteriza, espacios acuáticos y espacio aéreo nacionales.
- 7. Programa Nacional de Administración de Bienes en Depósito. (CONSEP, 2011:15).
 - a. Gestión para optimizar la administración de los bienes incautados por el Estado.
 - b. Coordinación para el cumplimiento de las disposiciones legales, en cuanto se refiere al destino de sustancias químicas, estupefacientes y psicotrópicas, incautadas.
- 8. Sistema Nacional de información de la temática de las drogas. (CONSEP, 2011:15).
 - a. Elaboración de estudios y publicaciones que den cuenta de la situación del alcohol, tabaco y otras drogas y orientan al Estado en sus estrategias de intervención.
 - b. Implementación del sistema nacional de información sobre drogas.
- 9. Programa de desarrollo normativo sobre ámbitos relacionados a la temática de las drogas. (CONSEP, 2011:15).
 - a. Desarrollo de cuerpos legales en los ámbitos de la prevención integral, reforma penal y administración de bienes en depósito.
- 10. Programa de construcción de la nueva institucionalidad del Estado en materia de drogas. (CONSEP, 2011:16).
 - a. Diseño e implementación de un modelo de gestión que armonice, facilite y complemente el ejercicio de la rectoría de la política pública sobre drogas.

11. Programa Nacional de Comunicación Social de la temática de las drogas. (CONSEP, 2011:16).

- a. Establecimiento de una red de comunicación interinstitucional a nivel nacional que permita la ejecución de acciones preventivas desde organismos seccionales, nacionales e internacionales.
- b. Elaboración y aplicación de un manual de políticas y procedimientos de las instituciones involucradas en la temática de drogas para la coordinación de los proyectos de comunicación social.

12. Programa de Participación y Cooperación Internacionales. (CONSEP, 2011:16).

- a. Presentación de propuestas de intervención en la temática de las drogas en las reuniones internacionales de la materia.
- b. Evaluación de los convenios internacionales suscritos por el país en materia de droga

Sin embargo, lastimosamente todos estos programas han sido planteados en base a información levantada en el año 2008 tal como se muestra a continuación:

TABLA 10
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASEGURAN HABER USADO ALCOHOL
Y OTRAS DROGAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO POR PAÍS

País	Alcohol	Cigarrillos	Marihuana	Cocaína	Pasta Base
Argentina	65,30	36,80	7,20	2,67	0,54
Bolivia	66,80	36,90	4,30	0,66	0,09
Chile	76,80	50,40	7,50	1,31	0,62
Ecuador	56,80	25,90	0,70	0,11	0,14
Perú	65,80	36,70	0,70	0,31	0,43
Uruguay	67,20	37,20	6,00	1,68	0,36

Fuente: UNODC
Elaborado por: Observatorio Nacional de Drogas

TABLA 11
PROMEDIO DE LA EDAD DE INICIO DEL USO DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS

País	Alcohol	Cigarrillos	Marihuana	Cocaína	Pasta Base
Argentina	17,0	16,4	18,3	18,8	18,8
Bolivia	18,8	18,8	22,0	20,8	24,5
Chile	18,3	16,6	18,2	22,9	20,8
Ecuador	18,5	18,4	18,7	20,4	19,8
Perú	18,4	18,2	18,7	19,2	20,0
Uruguay	16,8	16,3	19,0	20,0	19,6

Fuente: UNODC
Elaborado por: Observatorio Nacional de Drogas

En este sentido, el tema de datos estadísticos es una cuestión a la que no se le ha dado mucha importancia. Si no hay estadísticas actualizadas podríamos deducir que no existen conceptos unificados intersectoriales, lo que daría a entender que cada institución del Consejo Directivo del CONSEP comprende el tema de prevención bajo su propio criterio y no bajo uno homologado.

Es así como aplicando como año base el 2008, el Estado busca conocer qué es lo que les sucede a los colectivos para comprender el fenómeno de las drogas, concebido ante todo como un fenómeno social, tomando en cuenta que los ámbitos de la demanda y de la oferta, vistos desde la "licitud" o "ilicitud" muchas veces resultan ser insuficientes para el entendimiento de dicho fenómeno social.

El CONSEP y el Estado ecuatoriano buscan aplicar una mirada totalmente distinta para evaluar el fenómeno de las drogas en la cotidianidad del sujeto. Asimismo uno de sus objetivos es que la colectividad se reconozca como parte de un sistema donde cada sujeto cumple un rol y si uno de estos sujetos llegara a ausentarse, se generarían más fenómenos y más problemáticas.

La actividad del narcotráfico ha provocado que los países compartan sensibilidades mutuas a las que pueden vencer a través de su inclusión dentro de una agenda internacional promocionando la cooperación con el fin de limitar su accionar e impedir su expansión.

Al igual que el resto de la comunidad internacional, Ecuador ha comprometido su política de Estado en la lucha antinarcótica. La configuración de su cuerpo legal a nivel nacional también responde a los intereses a nivel internacional. De esta forma, y dado a que el narcotráfico ha establecido relaciones de interdependencia compleja, han surgido instituciones, reglamentos y prácticas con carácter de regímenes internacionales que regulan y fiscalizan el accionar de este fenómeno global, y de las cuales nuestro país también es partícipe, mostrando de esta manera, su preocupación y sentido de responsabilidad compartida frente a esta problemática.

Antes la guerra contra las drogas era represiva unilateralmente. No obstante, ahora los países han establecido canales de entendimiento para lograr acciones coordinadas. Dentro de estas políticas antidrogas, las naciones deben lanzar estrategias que arranquen el problema de raíz. No se trata únicamente de erradicar los cultivos ilícitos o de incrementar el número de operativos para confiscar toneladas de droga. A ello debe sumarse una táctica que vaya de lo general a lo particular, por medio del desmembramiento de los grupos de poder que están escondidos detrás de los narcotraficantes ya que no es un negocio dominado netamente por los carteles.

El narcotráfico ha sido caracterizado como un delito que atenta contra la seguridad pública, por lo que se debe evitar el mercado y proteger al consumidor. Los países deben canalizar sus esfuerzos para rehabilitar la salud de quienes han creado dependencia hacia estas sustancias. En este sentido, Ecuador ha mostrado un particular interés en promover planes de prevención contra la oferta y la demanda.

3. ANÁLISIS

En el primer capítulo de esta disertación, se habló sobre la importancia que tiene la seguridad nacional en los países, para garantizar la existencia de un mecanismo de protección de los individuos frente a las amenazas externas e internas.

Con el ataque de Angostura en marzo de 2008, el discurso de la seguridad nacional en Ecuador busca apartarse de los lineamientos de la teoría realista de las relaciones internacionales y dar paso a una estrecha vinculación con los conceptos de seguridad humana, los mismos que están orientados hacia el desarrollo sostenible del Estado, para atender las necesidades básicas de la población, de manera especial en las zonas fronterizas donde se ha evidenciado una alta acumulación de demandas sociales cubiertas a través del flujo de una economía dual.

Sin embargo, ese fue un momento clave en el que también se demostró que la soberanía territorial del país aún podía ser vulnerada e irrespetada. Asimismo, la creciente preocupación del gobierno frente al incremento de la inseguridad y del crimen organizado, conlleva a que, en la práctica aún se mantenga un discurso militar de defensa.

La criminalidad del narcotráfico impide que el Estado se desvincule por completo del paradigma realista, donde la concepción de seguridad nacional tiene un enfoque estrictamente militar. La intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo están militarizando la seguridad nacional, que en definitiva conlleva a brindar la seguridad humana establecida en la Constitución de la República y en el proyecto del “Buen Vivir”.

Por otro lado, y pese a las constantes declaraciones por parte de las más altas autoridades estatales, de que el país está exento de cultivos de coca, eso no significa que sea una zona libre de narcotráfico. Ecuador cuenta con una producción incipiente de hoja de coca, inferior a 0,25 hectáreas equivalentes a

2.500 metros cuadrados de cultivo, pero el desmantelamiento de laboratorios procesadores y la incautación de droga continúan siendo cada vez más visibles.

Fenómenos como éstos han propiciado la decisión del Presidente de la República, Señor Economista Rafael Correa Delgado, de ordenar que las Fuerzas Armadas establecieran el combate al crimen organizado entre sus prioridades, para lo cual la inversión y el gasto militar han entrado en un proceso de incremento presupuestario. Es así como el hecho de continuar empleando términos como “combate al crimen organizado” inmediatamente pone de manifiesto que de cierta manera se sigue viviendo la denominada “Guerra a las drogas”.

Esta política coincide parcialmente con la tesis realista de Hans Morgenthau, donde una nación está más segura cuando el Gobierno de ésta cuenta con la suficiente capacidad bélica para combatir los ataques de otros Estados.

Posiblemente no se trate de un enfrentamiento bélico entre dos o más naciones, pero sí subyace la estigmatización hacia quienes cultivan las plantas de donde se extrae la droga, hacia quienes la producen y hacia quienes colaboran como intermediarios en el circuito del narcotráfico.

Cabe recalcar que a pesar de que en la práctica, el Estado ecuatoriano continúa manejando una política de militarización de la seguridad nacional, sí se evidencia el ejercicio de las políticas de seguridad humana a través del Plan Ecuador.

De esta manera, podría decirse que el país está empleando simultáneamente ambos enfoques de seguridad, uno desde la óptica de la militarización y otro desde la óptica de los Derechos Humanos, aunque la postura de militarización conlleve en cierto momento a confrontaciones con la sociedad civil, ajena a la problemática del narcotráfico.

En el segundo capítulo de la presente disertación se evidencia cómo esa denominada “Guerra a las drogas” se manifiesta a través de la satanización de la

planta de coca. Pese a que existen un sinnúmero de drogas, en Latinoamérica y más específicamente en los Andes, toda la atención se centra en esta planta de consumo milenario.

Asimismo se evidencia la estigmatización que sufren los habitantes de los países vecinos de Colombia y Perú, la misma que ha manchado su imagen y continúa sembrando los cultivos ilícitos en estos países. Esta estigmatización es la que permite que la región se convierta en objeto de intervenciones nacionales y extranjeras.

Fernando Carrión Mena (citado en la presente disertación), manifiesta que la misma situación padece Ecuador al ser una “zona fronteriza del narcotráfico”. A diario se escucha decir que el país se ha constituido en el centro del crimen organizado. Sin embargo, con estas declaraciones, estaría afirmándose que el país se ha convertido en uno de los motores de este negocio delictivo.

Geográficamente Ecuador se ubica entre los dos mayores productores de coca en el mundo. Sin embargo, la verdadera posición geográfico-estratégica tiene mucho más que ver con limitar al Norte con Colombia y al Sur con Perú.

La estrategia está más vinculada a intereses políticos. Ecuador no es el centro del crimen organizado pero sí puede convertirse en el centro de la lucha estadounidense contra el narcotráfico, la misma que tiene más un enfoque político de dominio regional antes que un enfoque de seguridad. Este fenómeno siempre ha estado presente en el país, aunque se pretenda justificarlo con la salida de la Base de Manta.

Durante la década del 2000, la presencia de una base militar extranjera en Ecuador, le otorgó al país una especie de impunidad. Se intenta hacer creer que a raíz de la salida de ésta, los cultivos de coca en Colombia y Perú, incrementaron al igual que la droga incautada en Ecuador y la que proviene de éste, cuando lo que realmente ocurrió es que salió a la luz toda esa información que durante casi 10 fue desconocida. Incluso podría ser que el flujo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sea igual al que existía con la presencia del puesto de operaciones

de avanzada de Estados Unidos, con la diferencia de que ahora ya se tiene conocimiento de éste.

De igual manera el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos difundido por Estados Unidos estima que Ecuador exporta anualmente alrededor de 270 toneladas métricas de cocaína destinadas al consumo estadounidense y europeo, pero esta cantidad no se la compara con la de las exportaciones de otros países también involucrados en el mercado ilícito de drogas.

Finalmente, en el tercer capítulo de la presente disertación, el análisis desemboca en una mirada hacia el individuo como actor principal de la ejecución de un Plan Nacional de Prevención de Drogas, y en la necesidad de evitar criminalizarlo para que no se siga dificultando su acceso a los servicios, ni se obstaculice su integración social.

También se muestra cómo el país está trabajando en la recuperación de la planificación a largo plazo con un modelo de asignación de competencias. Así, la problemática de las drogas es vista desde las distintas aristas de una sociedad, como por ejemplo desde la salud, desde la educación, la cultura, desde el plano económico, entre otros contextos y símbolos sociales.

Pero si se parte del plano de la salud, se debe considerar lo mencionado por la Doctora Alexandra Delgado en cuanto a que el número de consumidores problemáticos, según la categorización de las Naciones Unidas, representa aproximadamente el 0,1% de la población mundial. ¿Acaso las políticas y programas preventivos de drogas que se están levantando están sobredimensionando a este 0,1% de la población?

No precisamente, pero si están sobredimensionándose otras demandas de la sociedad ecuatoriana. El país cuenta con una planificación intersectorial donde el ente rector de la política antidrogas es el CONSEP y donde el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas busca consolidar la responsabilidad compartida de las distintas instituciones estatales desde el ámbito de la oferta, el

ámbito de la demanda, la producción y/o el consumo, cada una de ellas se centra en el ámbito de su competencia pero con una mirada que parte desde una óptica global que evita la unipolaridad.

Para ejercer las políticas de prevención de drogas y aplicar los planes respectivos es estrictamente necesario pensar en el desarrollo humano y económico de las sociedades y en este caso especial, de la sociedad ecuatoriana. Si en las fronteras existe desarrollo humano y económico, la prevención de que estas poblaciones se involucren en actividades ilícitas será factible. Si tenemos una sociedad educada y saludable, habrá una mayor prevención en el consumo al contar con ciudadanos ampliamente informados sobre los posibles efectos no solo del uso de drogas, sino de las consecuencias generales.

Abarcando el análisis de los tres capítulos, la hipótesis de trabajo planteada en un inicio, en lo que se refiere a la necesidad del país de modernizarse para controlar el flujo de sustancias ilícitas, Ecuador ha tomado las medidas respectivas para hacerlo. Sin embargo, algunas de éstas no resultan ser 100% efectivas para lograr arrancar de raíz el problema.

La cuestión de modernizarse abarca una amplitud de aspectos. Desde el punto de vista de la seguridad humana, la modernización está enmarcada en la recuperación del rol del Estado para fortalecer una política social que asegure derechos elementales como la educación, la salud, la protección y la seguridad social. Con esto se impide que a falta de servicios básicos, los ciudadanos se involucren en actividades delictivas cuyos réditos les permitan suplir sus requerimientos más esenciales.

Desde el punto de vista de la seguridad nacional militarizada, el Estado ha invertido enormes cantidades de dinero en la modernización de las Fuerzas Armadas y en su completo equipamiento. El hecho de incautar altas cantidades de droga no significa precisamente que se esté controlando totalmente el flujo de sustancias ilícitas.

El contar con más efectivos militares y policiales y con más patrulleros que logren capturar más traficantes, decomisar más drogas, destruir más hectáreas de sembríos ilícitos y laboratorios, constituyen acciones determinantes en la disminución de la disponibilidad de sustancias ilícitas.

Si la seguridad nacional ha sido militarizada, ésta debería aplicar asimismo los enfoques de la teoría de la interdependencia compleja ya que al ser el narcotráfico y el crimen organizado problemas transnacionales y globalizados, el Estado requiere de una modernización con un gran avance en temas de comunicaciones, base de datos, estrategias, operativos y coordinación en todas las fases de su combate.

En cuanto a la capacidad financiera del narcotráfico, ésta sí facilita su desarrollo dentro del país, pero no lo expande por sí sola al resto de países de la región. Para controlar el flujo de sustancias ilícitas, el Estado a través de las instituciones involucradas en la defensa territorial y de la sociedad, requiere de una sofisticada modernización que permita fortalecer la seguridad en sus fronteras, por donde ingresa y sale la droga. La modernización constituye una necesidad urgente de mejorar el sistema de información nacional, el mismo que conjuntamente con la información proveniente de fuentes extranjeras, nos brinden una visión más certera de la realidad nacional.

En la actualidad el Estado ecuatoriano y las autoridades de las instituciones competentes han fomentado su participación en los procesos de Integración Regional a través de una política pública que articula la cooperación internacional en materia de drogas, razón por la cual ésta tiende a fortalecerse.

4. CONCLUSIONES

La seguridad nacional en Ecuador se concibe de acuerdo a las realidades que se han observado a lo largo de su desarrollo histórico, político, económico, social y militar. El país maneja una flexibilidad sobre el tipo de seguridad que emplea en cada perspectiva. Por el lado de la herencia histórica y política, el país continúa aplicando los conceptos de una seguridad militar realista. Aunque las

amenazas de entrar en un conflicto bélico con los países vecinos hayan quedado en el pasado, aún persisten aquellas en las que el territorio nacional pueda ser vulnerado por grupos subversivos. Estas amenazas se dan en primer lugar por el olvido al que quedaron relegadas las Fuerzas Armadas luego de haberse solucionado el problema limítrofe con el Perú y por la complejidad de controlar todo el espacio de la frontera con Colombia y Perú, así como de controlar el espacio aéreo y marítimo. En el ámbito del desarrollo económico y social, las amenazas están ligadas al vacío que la ausencia de servicios básicos por parte del Estado dejó en los pobladores de algunas zonas.

Ecuador está consciente de que el uso de la fuerza militar no es el único mecanismo para garantizar la paz. Sin embargo, ante la violencia de todo orden que genera el narcotráfico, el país ha decidido contar con el accionar de sus efectivos militares y policiales para impedir que bandas delictivas internacionales penetren en el territorio. Esta política provoca que la seguridad nacional militarizada genere una sensación ambigua de protección. Por un lado la delincuencia organizada puede llegar a identificar limitaciones al intentar operar en el país pero por otro, la ciudadanía puede llegar a sentirse criminalizada.

La seguridad nacional en su lucha contra el narcotráfico de hecho pretende alcanzar la seguridad humana con miras a luchar por el desarrollo social de sectores vulnerables proclives a la propagación del delito. Sin embargo, esta situación de modernización militar deja abierta la posibilidad de que lamentablemente se produzcan enfrentamientos fortuitos inevitables entre civiles y militares.

La decisión de militarizar la lucha contra el narcotráfico pone en evidencia que éste ha venido atacando fuertemente a las naciones. Es una decisión tomada a nivel regional que indica que se quiere arrancar de raíces y por la fuerza un fenómeno que siempre ha estado presente en la sociedad, pero que se ha consolidado desde hace aproximadamente 4 décadas. Esta medida surge ante la emergencia por la que atraviesan los países, una emergencia con una amplia gama de enfoques y que ha sacado a la luz debilidades sociales de todo tipo. El crimen organizado es la madre de otros delitos y es el indicador donde

desembocan los problemas que más afectan a las colectividades desde los distintos sectores sociales.

Colombia, Ecuador y Perú están ubicados en una de las zonas más privilegiadas del planeta debido a la riqueza natural de la Amazonía. El narcotráfico en los países andinos ha encontrado una oportunidad expansiva debido a las características de la región. Parte de la ausencia estatal en la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana está dada también por la geografía y la densidad de zonas parcial y/o completamente impenetrables. Cada uno de estos países cuenta con un límite fronterizo, y la suma de éstos crea una nueva frontera dando origen a una realidad ajena al imaginario social.

Después de la marihuana, la cocaína es la droga sintética más consumida a nivel mundial y encuentra su origen en Sudamérica, una de las regiones más fértiles del mundo y con mayor cantidad de población campesina para el cultivo de la planta de coca, así como para su transformación en sitios apartados, que constituyen los escenarios adecuados para que el narcotráfico inicie su circuito de expansión.

El narcotráfico es un fenómeno que se enriquece gracias a la permeabilidad de las fronteras. Sin embargo, éstas no solo deben entenderse desde el punto de vista limítrofe y territorial. Las fronteras existen entre países, pero también entre ciudades dentro de un mismo país y entre los propios ciudadanos. El narcotráfico se alimenta de las brechas existentes entre los países céntricos y los periféricos, entre lo urbano y lo rural, de las diferencias entre las clases sociales y de la pobreza, sea ésta por falta de ingresos económicos, por necesidades básicas insatisfechas e incluso por carencia de valores.

A nivel regional y nacional, los medios de comunicación han catalogado a Ecuador como centro del crimen organizado como si el fenómeno tuviera su origen dentro de su territorio. Lo que se logra con esto, consciente o inconscientemente, es que en la región se genere una mirada de rechazo hacia el país, convirtiéndolo en un problema propio de Ecuador mediante su nacionalización y olvidando que la problemática del narcotráfico, al tener un carácter transnacional necesita del

accionar conjunto de otros actores internacionales para poder llegar a distintos mercados.

La problemática de las drogas, al tener numerosas coyunturas, necesita un tratamiento integral desde el ámbito de la producción, de la oferta, y de la demanda. En Ecuador, la última vez que se hizo una reforma a la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (2004), el país no contaba con una planificación que se articulara dentro de las competencias de los distintos Ministerios de Gobierno, sino que se la elaboró desde una discusión unilateral concibiendo el uso y el abuso dentro del marco de lo legal y lo ilegal, más no desde las debilidades sociales ni de los individuos.

El CONSEP es el denominado ente rector de la política pública en materia de drogas y quien dirige la gestión de los demás Ministerios de Gobierno involucrados. No obstante, esta denominación estaría centralizando la responsabilidad global del problema en una sola institución aunque se hable de una gestión interministerial.

Ni el CONSEP ni el Observatorio Nacional de Drogas cuentan con estadísticas actualizadas sobre la problemática de este fenómeno. El Estado ecuatoriano continúa formulando sus políticas públicas en materia de drogas en torno a estadísticas arrojadas en el año 2008. La pobreza de datos reales incidiría en una toma de decisiones errada.

El Estado Ecuatoriano emplea la cooperación internacional como herramienta de política exterior. Sin embargo se evidencia una incipiente contribución por parte de instituciones como UNODC o la CICAD en materia específica de drogas. El Estado recibe y ofrece cooperación para el desarrollo, de manera que se puedan atender las necesidades básicas insatisfechas de poblaciones residentes en áreas vulnerables.

5. RECOMENDACIONES

Como país amazónico, desde el ámbito educativo, Ecuador debe revalorizar los territorios de su frontera como parte de su identidad. Los ecuatorianos debemos conocer mejor el espacio en el que vivimos y el patrimonio nacional que hemos heredado. La Amazonía ecuatoriana debe ser protegida no solo por su valor natural, sino también como un elemento clave para el ahorro de recursos, entre ellos los de tipo militar y que concentran gran parte de la inversión estatal.

Como país andino, con un alto porcentaje de población indígena y campesina, desde el ámbito educativo y cultural, Ecuador debe eliminar la idea errónea que se ha concebido de plantas ancestrales y milenarias como la hoja de coca o la Ayahuasca. Su uso verdadero va mucho más allá de lo recreativo. La cultura preventiva también se refiere a advertir cuál es el correcto uso que debe dárseles a este tipo de plantas, así como sus beneficios curativos y propiedades medicinales.

Si se habla de una integración regional, también debería hablarse de una integración nacional. En este sentido, debería continuarse fortaleciéndose la integración de las diferentes colectividades para que los ciudadanos en algún punto de su formación académica y personal se involucren con otras realidades que nunca dejan de ser ajenas al formar parte todos de un mismo sistema.

En un fenómeno como el narcotráfico, los medios de comunicación deberían preocuparse por educar e informar y evitar en lo posible el sensacionalismo. En tal virtud, así como se enfatiza el papel de nuestro país en la ruta del narcotráfico, también debería darse a conocer lo que sucede con el resto de países que sin lugar a dudas también están inmiscuidos en el tema.

La gestión de políticas públicas exige una reforma legal en el principal cuerpo jurídico en materia de drogas a nivel nacional. Si se está hablando de un nuevo proyecto de Código Penal, también debería pensarse en una actualización

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para que exista una lógica con el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas.

Aunque el CONSEP sea el ente rector a nivel nacional de la política antidroga, debería pensarse en una descentralización en el sentido de que cada Ministerio de Gobierno sienta un mayor compromiso con esta causa y no un compromiso parcial. Se puede asignar competencias y definir qué Ministerio de Gobierno es el ente rector de la política antidrogas desde el ámbito del cultivo, desde el ámbito de la producción y/o transformación, desde la vigilancia y supervisión, y desde el ámbito de la oferta y la demanda.

Siguiendo el ejemplo de la UNODC con su monitoreo anual de cultivos ilícitos de coca, Ecuador debería contar con un informe anual que recopile la información levantada por los distintos sectores. En este sentido, el CONSEP, en coordinación con el Observatorio Nacional de Drogas debería recabar la información de cada Ministerio en cuanto a las hectáreas cultivadas halladas y erradicadas, la cantidad de drogas incautada, los números de detenidos con y sin sentencia, la cantidad de adictos, los proyectos preventivos desarrollados y su nivel de éxito y/o fracaso. Solo así se podría llevar un seguimiento constante y consistente que permita conocer la evolución de la problemática así como de las soluciones propuestas por el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas.

La verdadera cooperación debería estar enfocada en sistemas que permitan el intercambio de información, saberes y experiencias entre los países para conocer qué es lo que ocurre en la región e identificar de qué manera podría o no afectar a nuestro país.

Para la gente de la frontera norte que vive día a día en su cotidianidad el tema del narcotráfico, la intervención debe ser económica. Es un tema integral ya que la economía implica un desarrollo social que genere educación, salud e inclusión, acceso a servicios básicos así como a una vivienda digna. El ámbito de la prevención debe enmarcarse de acuerdo a las necesidades de cada población dentro del territorio nacional. A aquellos pobladores del cordón fronterizo no se puede llegar con campañas de comunicación o de autoestima sin que

primeramente tengan sus necesidades básicas satisfechas. Debe estar acompañado de lo económico. La inclusión debe ser integral tratándose de un tema de conexión y de redes sociales.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Libros consultados de forma física

BROWN, H. (1992). *Reflexiones acerca de la seguridad nacional*. Argentina: Editorial Pegaso.

BABIESES, H., Cáceres, B. (2005). *Hablan los diablos, Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú*. Ecuador, Quito: Editorial Abya-Yala.

CARRIÓN, F., Espín, J. (2011). *Relaciones fronterizas: Encuentros y Conflictos*. Ecuador, Quito: Flacso.

CAMPOS, J., Pradhan, S. (2009). *Las múltiples caras de la corrupción*, Colombia: Banco Mundial

GÓMEZ, V. (2002). *Reflexiones sobre la seguridad nacional y la política exterior*. Ecuador, Quito: Flacso.

MANGOLD, P. (1990). *National Security and International Relations*. England, London: Routledge.

MORGUENTHAU, H. (1986). *Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz*, Argentina, Buenos Aires: Editor Latinoamericano

OTERO, D. (2007). *Las cifras del conflicto colombiano*. Colombia, Bogotá: Indepaz

RIVERA, F. (2008). *Seguridad multidimensional en América Latina*. Ecuador, Quito: Flacso

Publicaciones

Publicaciones consultadas de forma física

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador

Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (2008). *Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa: Hacia una nueva política de seguridad interna y externa*.

Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (2008). *Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa: Seguridad y Plan Ecuador*.

Ministerio de Coordinación de Seguridad. (2011, Diciembre). *Plan Ecuador: Informe de rendición de cuentas*.

Ministerio de Defensa Nacional. (2002). *Política de la Defensa Nacional del Ecuador*.

Publicaciones en sitios Web

AGECI, Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (2009). *Informe de Cooperación Internacional no reembolsable en el Ecuador 2007-2009*. Recuperado de http://www.seteci.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25:informes-de-cooperacion&catid=13:coopera-ecuador&Itemid=200

Asamblea Nacional. (2009, Julio 24). *Ley de Seguridad Pública y del Estado*. Recuperado de <http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Ley-de-Seguridad-Publica-y-del%20Estado.pdf>

CICAD, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (2003, Enero). *Evaluación del proceso de control de drogas, Ecuador*. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/mem/reports/2/Follow_up/EcuadorSpanish.pdf

CLAES, Centro Latino Americano de Ecología Social. (2005). *La nueva geografía amazónica: entre la globalización y el regionalismo*. Recuperado de <http://ambiental.net/publicaciones/OdelDNuevaGeogAmazonia.pdf>

CONALTID, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. (2007). *Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca, 2007-2010*. Recuperado en <http://www.rree.gob.bo/webmre/publicaciones//d134.pdf>

Congreso Nacional. (2004, Diciembre 27). *Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas*. Recuperado de http://www.consep.gob.ec/ley_transparencia/2_%20LOTAIP%20informacion%20legal/Documentos_2012/Ley_Sustancias_Estupefacientes_Psicotropicas_Codificacion.pdf

CONSEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (2009). *Plan de Gestión Institucional del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas*. Recuperado de [http://www.consep.gob.ec/ley_transparencia/6_%20LORAIP%20planificacion%20institucional/K\)%20planes%20y%20programas%20en%20ejecucion/K.1_PLAN%20ESTRATEGICO%202011.pdf](http://www.consep.gob.ec/ley_transparencia/6_%20LORAIP%20planificacion%20institucional/K)%20planes%20y%20programas%20en%20ejecucion/K.1_PLAN%20ESTRATEGICO%202011.pdf)

CONSEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (2009). *Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 2009-2012*. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/eng/National%20Plans/ECUADOR%202009-2012.pdf

CONSEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (2012). *Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2012-2013*. Recuperado de

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/2012_plan_preveni%C3%B3n.pdf

CONSEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (2012). *Referente teórico*, Recuperado de http://www.consep.gob.ec/descargas/referente_teorico_de_prevision.pdf

DEFINICIÓN ABC. *Definición de Hub (concentrador)*. Recuperado de <http://www.definicionabc.com/tecnologia/hub-concentrador.php>

JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. (2012). *Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2011*. Recuperado de http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2011/AR_2011_Spanish.pdf

Ministerio de Coordinación de Seguridad. (2011). *Plan Nacional de Seguridad Integral*. Recuperado de http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/01_Plan_Seguridad_Integral_baja.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. (2011). *Agenda de Política de la Defensa*. Recuperado de http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/04_Agenda_Politica_de_la_Defensa_baja.pdf

Ministerio del Interior. (2011). *Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad*. Recuperado de http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/02_Agenda_Nacional_de_Seguridad_Ciudadana_y_Gobernabilidad_baja.pdf

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. (2004, Junio 4). Boletín de prensa No. 321. Recuperado de <http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ano2004/junio/bol321.htm>

OEA, Organización de los Estados Americanos. (2011). *Informe hemisférico de la 5ta ronda de evaluación del progreso de control de drogas*. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/MEM/Reports/5/Full_Eval/Informe%20Hemisferico%20-%205ta%20Ronda%20-%20ESP.pdf

Presidencia de la República, Ministerio de Defensa. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Recuperado de <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>, p. 42.

UN, United Nations. (2000, Septiembre 13). *Declaración del Milenio*. Recuperado de <http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf>

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias*

- Sicotrópicas de 1988*. Recuperado de
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2009, Septiembre). *Ecuador, Monitoreo de Cultivos de Coca 2008*. Recuperado de
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/ecu_repo.pdf
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2010, Junio). *Ecuador, Monitoreo de Cultivos de Coca 2009*. Recuperado de
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Ecuador/Ecu09_Coca_Survey_es.pdf
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2010, Junio). *Colombia, Monitoreo de Cultivos de Coca 2009*. Recuperado de
<http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-Censo-2009-web.pdf>
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2012, Junio). *Colombia, Monitoreo de Cultivos de Coca 2011*. Recuperado de
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2010, Junio). *Perú, Monitoreo de Cultivos de Coca 2009*. Recuperado de
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Peru/Per09_report_sp_small.pdf
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. (2011, Junio). *Perú, Monitoreo de Cultivos de Coca 2010*. Recuperado de
<http://img.inforegion.pe.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/Monitoreo-cultivos-de-coca-2010.UNOC-resumen.pdf>
- United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2011, Mayo). *Money Laundering and Financial Crimes, Country Database*. Recuperado de
<http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2011/database/index.htm>
- VÉLEZ, R. (2012). *Informe de rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 2011-2012*. Recuperado de
http://www.consep.gob.ec/anuncios/rendicion_de_cuentas_final_2011.pdf
- WORDREFERENCE. *Definición de Hub*. Recuperado de
<http://www.wordreference.com/definition/hub>

Artículos de periódicos

Artículos de periódicos consultados de forma física

- El Comercio. (2012, Abril 10). Ecuador, marcado en el mundo por la coca. Seguridad y Justicia, p.5
- El comercio. (2012, Abril 20). La frontera sur amenazada por el narcotráfico. Seguridad y Justicia, p.2
- El Comercio, (2012, Abril 24). Correa ratifica en sede del ejército que militarizará combate al crimen, p 26
- El Comercio. (2012, Abril 26). Rafael Correa, ratifica en sede del Ejército que militarizará combate al crimen. Seguridad y Justicia, p 4
- El Comercio. (2012, Mayo 8). Militares son capacitados en tareas policiales. Seguridad y Justicia, p. 4
- Diario Hoy (2012, Marzo 18). Narcotraficante detenido en Quito
- Diario Hoy. (2012, Abril 6). Ecuador exporta unas 270 toneladas de cocaína al año. Judicial, p. 1.
- Diario Hoy. (2012, Mayo 28). Funcionan 25 pasos ilegales. p. 3

Artículos de periódicos recuperados en la Web

- CARRIÓN, F. (2012, Marzo 31). El Ecuador, un hub del narcotráfico. *Diario Hoy*. Recuperado de <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-ecuador-un-hub-del-narcotrafico-540722.html>
- CIDDDH, Centro de Investigación "Drogas y Derechos Humanos". (2012, Mayo 27). Ecuador: La región militariza combate al narco. http://www.cidddh.com/es/contexto_regional.php?id_region=rep201205311128477699440099639
- El Comercio. (2011, Septiembre 12). ¿El lavado es un soporte de la economía? Recuperado de http://www.elcomercio.com/seguridad/lavado-soporte-economia_0_552544814.html
- El Comercio. (2012, Abril 26). Millonaria inversión en equipo militar. Recuperado de http://www.elcomercio.com/seguridad/inversion-militar-escala_0_706129540.html
- El Comercio. (2012, Mayo 14). Avioneta mexicana llena de dólares se accidentó en Manabí. Recuperado de http://www.elcomercio.com/pais/Fallecidos-caida-avioneta_0_699530187.html

El Comercio. (2012, Mayo 25). La inversión militar escala desde el 2008, Recuperado de http://www.ecuadorenvivo.com/2012052592124/economia/la_inversion_militar_escala_desde_el_2008.html

El Comercio. (2012). Gafisud alertó en diciembre que por el país circularon inusualmente USD 2028 millones. Recuperado de http://www.elcomercio.com/seguridad/GAFI-antilavado-medidas_ECMFIL20120627_0001.pdf

Ecuador inmediato. (2008, Septiembre 18). Ecuador presenta Plan de Seguridad Integral. Recuperado de http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--87674

Ecuador Inmediato. (2012, Julio 12). Más laboratorios de droga en el país. Recuperado de http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=177220&umt=la_hora_quito_mas_laboratorios_droga_en_pais

El Universo. (2011, Diciembre 16). Plan de Seguridad busca fortalecer a la Fuerza Pública. Recuperado de <http://www.eluniverso.com/2011/12/16/1/1422/plan-seguridad-busca-fortalecer-fuerza-publica.html>

OPEAL, Observatorio de Política & Estrategia en América Latina. (2012, Junio 18). Gasto sudamericano en defensa: hacia más integración. Recuperado de http://www.opeal.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=11349&Itemid=71

Artículos de revistas

Artículos de revistas recuperados en la Web

Agencia EFE. (2012, Mayo). Correa descarta que narcotráfico esté desbordando Ecuador. Vistazo Online. Recuperado de <http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=20014>

Banco Central del Ecuador. (2011). Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos del Ecuador, 38. Recuperado de <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000805>

BORJÓN, J. (2010, Mayo). Lucha contra el crimen organizado: fracaso de la militarización. *Letras Jurídicas*, 21. Recuperado de <http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/21/borjon21.pdf>

COCKCROFT, J. (2010, Agosto). México: imperialismo, Estados Unidos, nuevas guerras y resistencia. *Revista Memoria*, 245. Recuperado de

<http://www.revistamemoria.com/pdf.php?path=16da947a30fa5714b18d&from=6&to=12>

Crítica en línea. (2011, Agosto). Ministro de Seguridad de Ecuador está de visita. *Crítica*. Recuperado de http://www.critica.com.pa/hoy/sucesosinterna.php?edition_id=20110828&external_link=ministro_de_seguridad_de_ecuador_esta_de_visita

GARCÍA, Á. (2010, Junio). Narcotráfico en Colombia: Un problema creado en otra parte, importado y asumido como propio. *Revista Estudios de Derecho*, N° 149, (Vol. LXVII). Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/8637/7971>

Instituto Español de Estudios Estratégicos. (2011, Junio). La evolución del concepto de seguridad. *Documento Marco del IEEE*, 5. Recuperado de <http://www.analisisinternacional.eu/archivo/viejos/dossiers/doss23.pdf>

MARTÍNEZ, A. (2001). ¿Qué es la Seguridad Nacional? *UNAM*. Recuperado de <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020211124628.html>

VEYRUNES, E. (2008, Julio). Las amenazas percibidas para la Amazonía: un estado del arte en términos de seguridad ambiental. *Centro de Estudios Políticos e Internacionales*, 28. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/6f/6f1369dd-1e59-4258-84ad-18e906e3b46e.pdf

Opinión Pública Ecuador. (2010, Agosto). Encuesta nacional y local. Boletín #01. Recuperado de http://www.sp-estudios.com/download/vp/Boletin_OPE_09ago10_sp.pdf

Procuraduría General del Estado. (2012, Junio). Ecuador rechaza la resolución que lo incluye en la lista de países no cooperantes del Gafi y ratifica su compromiso contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. *Boletín de prensa Comunicación Social*, CS/83. Recuperado de http://www.elcomercio.com/seguridad/Procuraduria-decision-GAFI-Ecuador-comunicado_ECMFIL20120625_0001.pdf

Entrevistas

Realizadas por el investigador

DELGADO, C.A, Psicóloga Clínica. Doctora. Directora Nacional de Control de la Demanda, CONSEP, (2012). Sobre la licitud o ilicitud de las drogas y el desarrollo alternativo preventivo.

RIVADENEIRA, J.E, Psicóloga Clínica, Coordinadora Nacional de la Estrategia de Alcohol y Drogas, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, (2012). Sobre las estrategias intersectoriales en materia de drogas.